

24ª REUNION — Continuación de la 16ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 6 DE 1953

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

Prosecretario: doctor Roberto J. Murano

DIPUTADOS PRESENTES:

ACUNA, Judith Elida
AGÜERO, Teodomiro de la Luz
ALBARELLOS, Juan
ALBRIEU, Oscar E.
ALENDE, Oscar Eduardo
ALONSO, José
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulio
ÁLVAREZ, Magdalena
ARIAS, Jesús Pablo
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
BALBI, Almar A.
BELNICOFF, Manuel
BENÍTEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA de GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS FIERRO, Raúl C.
CAMPANO, Guillermo M.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CARENA, Ezio Armando
CARRERAS, Ernesto
CARRIZO, Francisco Isidro
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlando
CASUCCIO, María Elena
CAVIGLIA de BOEYKENS, María C.
CLEMENT, Fernando Abel
CHALUP, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIUMINI de PARODI, Delia D.
DEGREEF, Juan Ramón
DEIMUNDO, Antonio J. C.
DEL RÍO, Arturo R.
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DI BERNARDO, Almerindo D.
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMÍNGUEZ, Carlos Joaquín
DOMÍNGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ, Expédito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
FLORES, Francisca A.
FONTANA, Alfredo
FORTEZA, Eduardo J.
GAETA de ITURBE, Dora Matilde
GAGO, Bernardo
GALLO, Luis M.
GARCIA, Juan C.

GIANOLA, Jorge N.
GOBELLO, José
GOTIA, Carlos Inocencio
GÓMEZ, Manuel Vicente
GOMIS, Pedro A. J.
GONZÁLEZ, Antonio F.
GONZÁLEZ, Santos
GONZÁLEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
HERMIDA, Antonio
IDOMÁNICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LATELLA FRÍAS, Donato
LOGUERCIO, Dante N.
LÓPEZ, Gerardo
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Plácido Guillermo
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MARCÓ, Teodoro E.
MARTÍNEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocinio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIEL ASQUÍA, Angel J.
MIGUEL de TUBÍO, Josefa
MORENO, Silverio
MORESCHI, Humberto P.
MOYA, Isaac Donald
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORDÓÑEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Rómulo E.
ORTIZ de SOSA VIVAS, Dominga I.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
OTERO, Pedro Ramón
PALLANZA, Adolfo
PARINO, Edmundo
PAZ, Edvino Alfredo
PELLERANO, Jorge S.
PERALTA, Angel Enrique
PERETTE, Carlos H.
PÉREZ, José C.
PÉREZ OTERO, Tito V.
PERICÁS, Luis
PIAGGIO, Juan José
PICERNO, José E.
PIOVANO de DE CASTRO, Matilda
POSADA, José B.
PRACÁNICO, Zulema N.
PRESTA, José
PRESTE, Pascual N. H.
QUEVEDO, José C.
RABANAL, Francisco
RAVIGNANI, Emilio Juan F.
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto L.
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Celina E.

RODRÍGUEZ, Manuel Félix
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo I.
SAINZ, Héctor Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SANTUCHO, Oscar D.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
SPACHESSI, Modesto A. E.
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Urbelina
TESORIERI, José V.
TOFANELLI, Oreste
TOMMASI, Victorio M.
TORTEROLA de ROSELLI, Isabel A.
VERGARA, Amando
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL, Otilia
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZEREGA, Oreste A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

ACOSTA, Policarpo
AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ARGUMENTO de PEDROZA, Celfa
CAMPORA, Héctor J.
GRO, Carlos
LÓPEZ, Pablo
LUNA, Pedro Antonio
MAESTRO, José Ángel
MONTES, Abel
VILLARREAL, Pedro

AUSENTES, CON AVISO:

ARGAÑA, José María
COBELLI, Francisco
RODRÍGUEZ de COPA, Seferina del C.
ULLOA, José Manuel

DELEGADOS PRESENTES:

BARRERA, Néctar A.
ESCARDÓ de COLOMBO BERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNÍCOLA Elena A.
MONTAÑA, Agapito
PAROLÍN, Orlando L.
POLO, Antenor
RÍOS, Octavio A.
RODRÍGUEZ GALLARDO, A.

AUSENTE, CON LICENCIA:

SAN MARTÍN, Pedro J.

AUSENTE, CON AVISO:

MARIÑO, Ramón

SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (página 1010.)
- 2.—**Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley por el que se establecen normas para las inversiones extranjeras en el país.** (página 1010.)

—En Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto de 1953, a la hora 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que se pase lista.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, se pasará lista.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Diputados presentes: Albarellos, Alonso, Alvaredo de Blanco Silva, Alvarez, Arias, Astorgano, Balbi, Belnicoff, Bidegain, Biondi, Brigada de Gómez, Brizuela, Campano, Camus, Carena, Carrizo, Castagnino, Castro, Casuccio, Caviglia de Boeykens, Dacunda, Da Rocha, Degliuomini de Parodi, Degreef, de Prisco, di Bernardo, Diskin, D'Jorge, Domínguez (C. J.), Domínguez (R.), Dussaut, Espejo de Ramos, Fassi, Fernández (E.), Fernández (H. S.), Flores, Fontana, Forteza, Gaeta de Iturbe, Gago, Gallo, García, Goitia, Gómez, González (S.), González (V.), Hermida, Idománico, Labanca, Lanfossi, Lannes, Latella Frías, Loguercio, López (G.), López (N.), López (P. G.), Macri, Marcó, Martínez, Mattis, Merlo, Messina, Miel Asquía, Miguel de Tubío, Moreno, Moreschi, Moya, Musacchio, Nudelman, Ordóñez Pardo, Orlandi, Osella Muñoz, Otero, Pallanza, Paz, Pellerano, Peralta, Pérez (J. C.), Picerno, Piovano de De Castro, Posada, Pracánico, Presta, Preste, Quevedo, Ravignani, Rinaldi, Rocamora, Rodríguez (C. E.), Rodríguez (M. F.), Rumbo, Salvo, Santucho, Siboldi, Spachessi, Tejada (M. U.), Tesorieri, Tofanelli, Tommasi, Torterola de Roselli, Vergara, Villa Maciel, Weidmann y Zerega.

2

INVERSIONES EXTRANJERAS

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa la sesión, con la presencia de 86 señores diputados.

De acuerdo con la resolución acordada por la Honorable Cámara, al adoptar en la sesión del día de ayer un plan de trabajo, está en consideración el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, despachado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda —cuyo dictamen está contenido en la orden del día 125— por el que se establecen las normas que habrán de regir las inversiones extranjeras en el país.

Se va a dar lectura del despacho.

Sr. Rinaldi. — Hago indicación de que se prescinda de la lectura, ya que todos los señores diputados disponen del texto impreso.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, se suprimirá la lectura.

—Asentimiento.

(Orden del día número 125)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen normas referentes a inversiones de capitales extranjeros que se incorporen al país en la industria y en la minería; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación, con las siguientes modificaciones:

19—Substitúyese el artículo 3º por el siguiente:

«Las inversiones extranjeras que se realicen de acuerdo con la presente ley deberán ser previamente aprobadas, en cada caso, por el Poder Ejecutivo nacional. Para la aprobación de las inversiones se tendrá en cuenta:

- «a) Que la actividad a la que se destine la inversión contribuya a la realización del desarrollo económico previsto en los planes de gobierno, traduciéndose directa o indirectamente en la obtención o economía de divisas;
- «b) Que en los casos de capitales que se incorporen bajo la forma de bienes físicos, éstos comprendan todas las máquinas, equipos, herramientas y otros elementos concurrentes para asegurar la instalación total de la planta y, además, un volumen adecuado de materias primas y repuestos como para asegurar un normal funcionamiento por el período de tiempo que, en cada caso, se considere necesario;

- «c) Que las máquinas mencionadas y equipos deben ser nuevos o encontrarse en perfecto estado de conservación y responder a sistemas modernos y eficientes de producción;
- «d) El precio de los bienes físicos que integren la inversión será el corriente en los mercados de exportación a la fecha del ingreso al país.»

2º — Suprímese en el artículo 4º, segundo apartado, la palabra «argentina».

Sala de la comisión, 3 de agosto de 1953.

Juan Ramón Degreef. — Hernán S. Fernández. — Jesús Pablo Arias. — Orlando Castro. — Expédito Fernández. — Elena A. Fernícola. — Antonio Hermida. — Plácido Guillermo López. — Agapito Montaña. — Humberto P. Moreschi. — Edvino A. Paz. — Mafalda Provano de De Castro. — Seferina del C. Rodríguez de Copa. — Eduardo I. Rumbo. — Modesto A. E. Spachessi. — María Urbelina Tejada.

En disidencia:

Oscar E. Alende.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los capitales procedentes del extranjero que se incorporen al país para invertirse en la industria y en la minería, instalando plantas nuevas o asociándose con las ya existentes, para su expansión y perfeccionamiento técnico, gozarán de los beneficios que acuerda la presente ley.

Art. 2º — A los fines del artículo 1º, los capitales extranjeros podrán ingresar al país:

- a) Bajo forma de divisas;
- b) Bajo forma de maquinarias, equipos, herramientas y otros bienes productivos necesarios para el desarrollo integral de la actividad a la que se dedicará el inversor.

Art. 3º — Las inversiones extranjeras que se realicen de acuerdo con la presente ley deberán ser previamente aprobadas, en cada caso, por el Poder Ejecutivo nacional. Para la aprobación de las inversiones se tendrá en cuenta:

- a) Que la actividad a la que se destine la inversión contribuya a la realización del desarrollo económico previsto en los planes de gobierno, traduciendo directamente o indirectamente en la obtención de divisas;

- b) Que en los casos de capitales que se incorporen bajo la forma de bienes físicos, éstos comprendan todas las máquinas, equipos, herramientas y otros elementos para asegurar la instalación total de la planta y, además, un volumen adecuado de materias primas y repuestos como para asegurar su normal funcionamiento por el período de tiempo que se considere necesario. Dichas maquinarias y equipos deben ser nuevos o encontrarse en perfecto estado de conservación y responder a sistemas modernos y eficientes de producción. El precio de los bienes físicos que integren la inversión será el corriente en los mercados de exportación a la fecha del ingreso al país.

Art. 4º — Los capitales extranjeros que ingresen de acuerdo con la presente ley quedarán sujetos a la legislación argentina y equiparados a los capitales nacionales.

Las empresas que se constituyan con esos capitales deberán organizarse de acuerdo con la legislación argentina vigente y ajustar su acción a las directivas de los planes de gobierno. Estas empresas recibirán un tratamiento igual al que reciben empresas argentinas similares.

Art. 5º — Para tener derecho a los beneficios que conceden los artículos 6º y 10 los inversores extranjeros deberán solicitar la inscripción de sus capitales en el registro nacional que se creará a ese efecto.

Art. 6º — A partir de los dos años de la fecha en que la inversión extranjera haya sido inscrita en el registro mencionado en el artículo 5º, el inversor tendrá derecho a transferir al país de origen utilidades líquidas y realizadas provenientes de la misma inversión hasta el 8 % sobre el capital registrado que permanezca en el país, en cada ejercicio posterior anual.

Art. 7º — Los inversores extranjeros tendrán derecho a capitalizar e inscribir como capital extranjero las utilidades que pudieran transferir de acuerdo al artículo anterior, que no hubiesen transferido por su voluntad expresa.

Art. 8º — Las utilidades cuya transferencia, dentro de las condiciones indicadas en el artículo 6º, no se hubiere solicitado, o que no se decidiera capitalizar y registrar como capital extranjero, al igual que todo excedente de utilidades sobre el mencionado por ciento, quedarán definitivamente nacionalizadas y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto.

Art. 9º — Las utilidades que se capitalicen y registren como capital extranjero y las utilidades que a su vez produzcan gozarán del

derecho de transferencia al exterior establecido por los artículos 10 y 6º de esta ley, respectivamente.

Art. 10. — A partir de los diez años de la fecha de la inscripción del capital extranjero originario en el registro indicado en el artículo 5º, el inversor tendrá derecho a retirarlo del país en cuotas del 10 al 20 % anual, según se establezca en cada caso, al autorizar la inversión. La repatriación del capital sólo podrá ser efectuada con fondos propios del inversor. Las utilidades capitalizadas ganarán la antigüedad del capital originario.

Art. 11. — Los inversores extranjeros comprendidos en el régimen de la presente ley que no hubiesen inscrito sus capitales en el registro indicado en el artículo 5º perderán todo derecho a los beneficios que acuerda esta ley, y los mencionados capitales se considerarán definitivamente incorporados al país.

Art. 12. — Al autorizar el ingreso al país de cada inversión, el Poder Ejecutivo podrá:

- a) Eximir total o parcialmente del pago de los derechos de aduana a los bienes físicos que se incorporen al país;
- b) Declarar «de interés nacional» a la nueva actividad que se incorpore al país y aplicar en su favor las medidas de fomento y defensa previstas en la ley 13.892 (decreto 14.630 del 5 de junio de 1944) de fomento y defensa de la industria.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alfredo Gómez Morales. — Miguel Revestido. — Pedro José Bonanni. — Antonio F. Cafiero.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 14 de julio de 1953.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad un proyecto de ley que prevé el régimen destinado a fijar el *status* para las inversiones de capital extranjero que se radiquen efectivamente en el país.

Los aspectos vinculados con las inversiones extranjeras de capital han venido preocupando, especialmente en los últimos años, a los gobiernos de los países en proceso de desarrollo económico.

El mercado internacional de capitales, con sus corrientes a corto y largo plazo, que fluían desde las zonas de excedente a las de escasez, equilibró, en los tiempos anteriores a la primera guerra mundial, las necesidades producidas por el movimiento del comercio multilateral internacional, y por los requerimientos para la explotación de las riquezas naturales, financiación de los servicios públicos u otras inversiones que requerían abundantes capitales.

La gran represión iniciada hacia 1930 y los riesgos sufridos por el capital, lo convirtieron, por ese entonces, en una fuerza de dislocación y perturbación internacional. Dejó de cumplir su acción equilibradora para buscar ante todo seguridad, fluyendo dentro de esta condición, a los lugares donde era más urgentemente requerido. La mayor parte de los países debieron introducir y aceptar después de la quiebra del patrón oro en 1931, contralores de cambio sobre el movimiento de capitales.

Como resultado de las señaladas circunstancias, el mercado internacional de capitales quedó destruido y pocas son las perspectivas, por lo menos a corto plazo, de que pueda ser restaurado en análogas condiciones.

Varios han sido los arbitrios intentados en el orden internacional para cubrir tan importante brecha. Se crearon organismos internacionales de financiación que, salvo excepciones circunstanciales, no cumplieron satisfactoriamente con sus finalidades, en especial en los casos de requerimientos urgentes de países en desarrollo. Los créditos gubernamentales han resultado, también, un sustituto poco eficaz de la banca internacional privada.

Es más, los créditos privados generalmente fueron reintegrados por los deudores mientras que, a menudo, ha sucedido lo contrario con los créditos gubernamentales. Esto último ha dado lugar a transacciones o arreglos financieros o políticos, no siempre convenientes para el mantenimiento de las soberanías nacionales de los países deudores.

Si se parte de la base de que, por lo menos a corto plazo, el mercado internacional del capital no será restaurado, y si ello llegara a implicar el mantenimiento de los controles de cambio en lo referente a las exportaciones de capitales de la mayor parte de los países, fácil es colegir que cualquier sistema de convertibilidad monetaria será distinto del tradicional.

Estos cambios en la estructura de las relaciones económicofinancieras internacionales, así expuestos objetivamente, y de un modo general determinan la necesidad de que los países deudores, en especial aquellos que se encuentran en desarrollo, planifiquen integralmente sus economías. Ello es indispensable para protegerlas de los impactos cíclicos que emanan de los centros industriales a los países de la periferia y, fundamentalmente, para elevar el nivel de vida de las poblaciones, base esencial del bienestar social.

En la medida en que esta evolución en las prácticas económicofinancieras internacionales va siendo ponderada, surgen las nuevas tendencias en la política de inversiones. Todos los países en desarrollo coinciden, prácticamente, en la necesidad de fomentar las inversiones extranjeras como medio de acelerar el desenvolvimiento económico. En ese orden de ideas casi todos también, además de concederle estímulos, consideran conveniente fijar legalmente el *status* de dichas inversiones a fin de evitar circunstancialmente, las perturbaciones que cierto tipo de capital denominado *hot money*, podrá originar en las economías nacionales y en particular en los balances de pagos.

De esta manera se procura atraer inversiones que se radiquen efectivamente en los países, participando en forma coordinada e integral en los programas nacionales de desarrollo económico.

Ya se confía menos en la efectividad de las ayudas, externas como medio de financiamiento; en las conferencias internacionales hoy se pide más comercio y precios justos y equitativos.

Esta última posición, además de significar que los países en desarrollo están adquiriendo conciencia de su lugar en la economía mundial, lleva implícita la conclusión de que el desarrollo económico debe basarse fundamentalmente en medios de financiación internos, o sea en la inversión de ahorro nacional.

Los estudios realizados por organismos internacionales, especialmente por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y por instituciones financieras de algunos países, han dado la pauta de que la acción cumplida por los capitales extranjeros colocados en la América latina ha sido en los últimos tiempos un tanto sobrestimada.

Sin que ello implique concordar con las cifras, es de señalar que en la reunión de la CEPAL, celebrada recientemente en Río de Janeiro, se informó que sobre un promedio anual de inversiones totales de capital de 6.000.000.000 de dólares, efectuadas en América latina en el período 1946/52, sólo un 5 % correspondió a las inversiones extranjeras.

A pesar de lo expuesto, se considera que cabe a las inversiones extranjeras un interesante papel en los planes de desarrollo económico, ya sea a través del aporte que significan los adelantos tecnológicos, o de los propios medios de financiación que se incorporen, pues ellos pueden contribuir al aceleramiento del ritmo del desarrollo.

De acuerdo con informes suministrados en la mencionada reunión de la CEPAL, las inversiones brutas totales de América latina representaron en el período 1946/52 el 16,5 % del ingreso bruto total, término medio. Si bien, como allí se señalara, esta proporción dista mucho de ser baja, es evidente que los países altamente industrializados se desarrollan a un ritmo más veloz, y, por lo tanto, si se desea equilibrar la economía mundial, debe favorecerse un desarrollo igualmente acelerado de los países productores primarios.

Los aportes de capitales extranjeros privados podrían evitar que se comprima el ingreso por habitante —lo que equivaldría disminuir sus posibilidades presentes de consumo— cada vez que se intente acelerar el desarrollo.

Pero es preciso aclarar que no basta con que los países en desarrollo brinden condiciones de seguridad y estímulo a las inversiones privadas extranjeras, creando un clima favorable a las mismas. Es necesario, además, que los países inversores también se ocupen de ello y aprecien la conveniencia de esas inversiones, sobre todo en casos como el actual, en los cuales podrían contribuir a aliviar la preocupación que surge respecto de las consecuencias de una posible retracción económica en los grandes centros industriales. En este orden de ideas, también ellos han de esforzarse en acordar facilidades a los capitales que se radiquen en el exterior, eliminando las trabas que las dificulten, entre las cuales cabe mencionar, especialmente, la doble tributación impositiva.

La inversión de capitales extranjeros en la República Argentina, iniciada apenas terminada la guerra de la Independencia, ha sido, sin duda, importante, y hasta no hace muchos años fué característica saliente de la estructura económica nacional. Algunos de esos capitales, especialmente de los colocados a largo plazo, han prestado una ponderable contribución a la evolución progresista del país.

Es lamentable tener que señalar, sin embargo, que muchas de esas inversiones, y en particular la mayor parte de las efectuadas a corto plazo, amparándose en la liberalidad de las disposiciones constitucionales y legales, realizaron maniobras de toda índole, inspiradas en el solo objeto de satisfacer desmedidos propósitos especulativos.

Como consecuencia de lo expuesto, las inversiones extranjeras fueron inferiores a las que aparecen registradas en los libros de muchas empresas. Es conocido el caso de capitalización de utilidades realizadas en el país, obtenidas sobre ventas a menudo efectuadas en el mercado interno y financiadas con crédito facilitado sobre la base de dinero de propiedad del pueblo argentino, así como el hecho frecuente del aguiamiento de capitales.

Estas maniobras, de las cuales las indicadas no son sino ejemplo, tenían por objeto, unas veces, abultar los capitales para justificar mayores servicios financieros al exterior; otras, simular menor rendimiento sobre los capitales invertidos; otras, en fin, lograr condiciones favorables para el caso de producirse una eventual expropiación, de manera que el Estado tuviese que pagar por las inversiones lo que no habían costado.

Como es natural, la mencionada liberalidad resultó inadecuada para defender al país contra la avidez desenfrenada de algunos inversores y, sobre todo, de aquellos que, impulsados por voluntades imperialistas, constriñeron y retrasaron sus grandes perspectivas y las de su pueblo laborioso y capaz que, como quedó evidenciado desde la instauración del justicialismo, ha sabido acrecentar la riqueza nacional con clara inteligencia y formidable tesón.

Con respecto a las inversiones a corto plazo, cabe señalar, corroborando lo expresado, que en estudios realizados por la Organización de Cooperación Económica Europea se llegó a la conclusión de que los gobiernos deberán establecer controles para los movimientos de esos capitales, pues por ser de índole especulativa constituyen una rémora para las economías nacionales.

De acuerdo con una estimación preparada por el Banco Central de la República Argentina, las inversiones extranjeras ascendían en 1949 a \$ 7.300.000.000. De ese total correspondía a los principales países inversores europeos el 63,3 %, a Estados Unidos y Canadá, el 25,7 %, y a otros países, el 11 por ciento.

Dentro del período 1946/52, la repatriación de la deuda externa y la nacionalización de los servicios públicos originaron una rápida disminución del saldo de las inversiones foráneas. Estas medidas, que contribuyeron a consolidar la independencia política y económica del país, aliviaron la presión que el pago de servicios financieros y réditos anuales ejercía sobre nuestro balance de pagos.

La información que antecede demuestra en forma fehaciente que el primer Plan de Gobierno 1947/51 fué financiado fundamentalmente con ahorro nacional y que, además, en el transcurso del mismo disminuyó en una buena parte el total de inversiones extranjeras realizadas hasta entonces en el país. En efecto, según cálculos de instituciones internacionales, el capital del país se incrementó en alrededor del 50 % en el período 1945/51.

De esto no debe inferirse que se reste al capital extranjero un importante papel en nuestros planes de desarrollo. Por el contrario, el segundo Plan de Gobierno 1953/57, si bien basa igualmente sus posi-

bilidades de inversión en el ahorro nacional, incluye prescripciones que tienden —como objetivo permanente— a auspiciar y promover el movimiento y la radicación de capitales extranjeros productivos que deseen cooperar con nuestro desarrollo económico, así como favorecer el intercambio de conocimientos técnicos.

De un modo particular, en el capítulo sobre Minería (1) de dicho Plan de Gobierno, se establece que el Estado auspiciará la participación de capitales privados nacionales e internacionales que se avengan a cumplir con las prescripciones constitucionales de nuestra economía social. Además, en el capítulo sobre Industrias (2) se expresa que el Estado promoverá y auspiciará la radicación en el país de industrias extranjeras, especialmente las de alta eficiencia técnica, a las cuales se les podrá asignar prioridad en función del interés general y de la defensa nacional. Para facilitar la radicación de esas industrias prevé la concesión de franquicias, tales como liberación de derechos aduaneros, exenciones impositivas, ventajas cambiarias y créditos para su desenvolvimiento normal.

Hasta ahora las inversiones extranjeras han estado sujetas a disposiciones que fué dictando el Banco Central de la República y a las incorporadas a los convenios de pagos firmados con algunos países.

Si bien nunca ha existido una regla que fijase en forma permanente el *status* de las inversiones extranjeras, todos los aspectos económico-financieros, con ellas vinculados, han sido atentamente observados por dicha institución. Las diversas circulares dictadas sobre esta materia parten del año 1943, fecha en que se estableció el control de fondos y, particularmente, desde 1947. Muchas de ellas han sido derogadas en razón de haber sido substituidas por otras que las circunstancias hicieron aconsejables. A partir de 1950 se acordaron facilidades para la repatriación de fondos e inversión y aportes de capitales extranjeros en forma de mercaderías y, recientemente, se han autorizado las inversiones a corto plazo, a través de operaciones de pase.

Pero las nuevas tendencias en la economía internacional y el planeamiento de nuestra economía, venían evidenciando la necesidad de prestar especial atención a los problemas vinculados con las inversiones extranjeras. Esta necesidad se hizo sentir en forma particular al dictarse la Constitución justicialista de 1949, debido a los principios que esta incorpora en materia de función social de la propiedad y del capital, así como por las distinciones que establece en materia de explotación de servicios públicos, minerales y combustibles.

Los programas de expansión económica que se han venido desarrollando con el primer Plan de Gobierno 1947/51, y que ahora se han ordenado y precisado en el segundo Plan de Gobierno 1953/57, crearon las condiciones necesarias para que se dote al país de una moderna ley de inversiones que permita al capital extranjero participar en nuestro desarrollo económico sobre adecuadas bases.

En el proyecto de ley de inversiones de capital, se ha tenido en cuenta la experiencia nacional y la correspondiente a países extranjeros, especialmente latinoamericanos, en los cuales se ha legislado re-

cientemente sobre la materia. Tal es el caso de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. También se han tenido en cuenta las legislaciones de Turquía, Japón y Egipto.

Se han considerado también los avances realizados en países de economías industrialmente evolucionadas, conforme a su manifestación general en el problema de las inversiones.

Este análisis ha permitido comprobar que existe una tendencia definida y bastante coincidente en las reglas generales para el tratamiento de los capitales extranjeros, la cual se acentúa con respecto a las condiciones establecidas para las transferencias de utilidades y para la repatriación de capitales.

Los artículos 1º y 3º del proyecto de ley comprenden disposiciones que vinculan y condicionan los beneficios a concederse a los capitales extranjeros que se incorporen al país con los proyectos y realizaciones de los planes de gobierno.

La orientación de las inversiones extranjeras hacia determinados sectores de la economía y hacia determinados proyectos específicos preparados para lograr una expansión ordenada e integral de la misma debe alcanzarse haciendo coincidir el interés del inversor con los intereses nacionales.

Cabe destacar que otros países han adoptado un tratamiento análogo: los de la zona de la libra esterlina, por ejemplo, propician las inversiones procedentes de la zona del dólar, dando preferencia en materia de transferencias de utilidades y reintegro de capitales a los que se inviertan en los proyectos preparados por el conjunto de los países de la Comunidad Británica.

El texto del artículo 3º contiene, además, importantes previsiones en sus incisos. La del inciso a) dispone que las inversiones deben hacerse en actividades que contribuyan a la realización del desarrollo económico previsto en los planes de gobierno, debiendo traducirse directa o indirectamente en la obtención o economía de divisas. Esta disposición tiende a favorecer a las inversiones que no interfieran con los intereses generales del país, pues de lo contrario no serían admitidas. Asimismo, para que puedan atenderse regularmente las remesas al exterior o reembolso de capitales sin afectar los balances de pagos es necesario que las inversiones extranjeras, además de ser reproductivas, provean las divisas para su financiación, ya sea incrementando las exportaciones o reduciendo las importaciones.

El inciso b) contiene previsiones tendientes a favorecer el ingreso de bienes de capital, limitando los de materias primas y repuestos a los necesarios para poner en marcha las industrias que se instalen en el país. Además, exige expresamente que las maquinarias y equipos que se incorporen como inversión de capital se hallen en perfecto estado de eficiencia y conservación. De esta manera se procura evitar la incorporación de industrias que, por deficiencias de material, produzcan a bajos rendimientos y a elevado costo.

Como puede apreciarse, el proyecto sólo se refiere a los capitales que se radiquen en el país de acuerdo con sus previsiones. Ello tiene su explicación: el capital extranjero incorporado anteriormente será considerado dentro de las normas actuales del Banco Central de la República Argentina y las que el mismo dicte en el futuro. Es preciso insistir en que estos capitales no siempre se han invertido en industrias de interés general para el país y que su formación no siempre ha seguido un proceso de sano desarrollo. En consecuencia, las posibilidades de efectuar remesas de

(1) Segundo Plan Quinquenal, XII. G. 5.

(2) Segundo Plan Quinquenal, XVII. G. 10.

utilidades al exterior o repatriaciones de capital deben quedar subordinadas a las posibilidades de la economía del país, especialmente del balance de pagos, y conformarse a la política que en estas o en otras circunstancias determine el Poder Ejecutivo con la más amplia flexibilidad.

El artículo 2º del proyecto se refiere a las formas de ingreso de los capitales extranjeros, las cuales podrán realizarse en divisas o en maquinarias, equipos, herramientas y otros bienes productivos. Cabe aclarar al respecto que la proporción entre inversiones en efectivo y maquinarias y equipos, etcétera, es variable y depende del tipo de industria a la que se aplique la inversión. Pero en los casos en que la inversión se realice en bienes de capital u otros bienes será menester que se introduzca la cantidad en efectivo adecuada para hacer frente a los requerimientos financieros iniciales de instalación de la industria y primeras necesidades de capital circulante de la empresa.

Por el artículo 4º se equipara el tratamiento de los capitales extranjeros con los nacionales, dentro del espíritu de los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes.

Así como la ley concederá beneficios a los capitales extranjeros que se registren en calidad de tales, preciso es recordar, en lo que respecta a la nacionalidad de las compañías, sociedades anónimas y personas jurídicas en general, que la legislación comparada no es uniforme.

La Argentina ha mantenido en las conferencias internacionales una posición tradicional basada en la doctrina Bernardo de Irigoyen, según la cual, las personas jurídicas deben su existencia exclusivamente a la ley del país que las autoriza y, por consiguiente, no hay en ella nacionales y extranjeros; no hay individuos de existencia material con derecho a protección diplomática porque no son las personas las que se ligan. Así como simplemente los capitales bajo forma anónima, lo que importa, como la palabra lo indica, no haber nombre, nacionalidad ni responsabilidad individual comprometida.

Por lo tanto, los capitales extranjeros, si bien son equiparados con los capitales nacionales, quedarán sujetos, como estos últimos, a las disposiciones constitucionales y legales del país.

El artículo 6º del proyecto prescribe las condiciones en que podrán hacerse las transferencias al exterior, en concepto de utilidades líquidas y realizadas. El por ciento máximo que podrá autorizarse será de hasta el 8 % anual de los capitales registrados. Este por ciento resulta razonable y equitativo si se considera que en el período 1946/52 el beneficio promedio anual de 264 sociedades anónimas nacionales, que incluyen algunas constituidas con capitales extranjeros, y representan el 68 % del total, ha sido de alrededor del 16 % de los capitales efectivos.

Como es sabido, nuestro país ofrece a los capitales extranjeros condiciones excepcionales que eliminan cualquier riesgo que no sea el inherente a la propia explotación de las empresas, cuyo éxito en los negocios depende, como es natural, del acierto en la conducción de parte de sus directores.

Las amplias garantías constitucionales y legales, la estabilidad política, la capacidad de expansión de los recursos naturales, la estabilidad económico-financiera, su moderno régimen impositivo, con tasas moderadas e inferiores a las que rigen en los países de origen de los capitales extranjeros; la población, su cultura y el bienestar social, hacen de nuestro país una insula de paz y prosperidad en la cual los in-

versores foráneos, además de la lógica y razonable productividad, encontrarán organización, seguridad, respeto e igualdad para sus capitales.

Se ha considerado prudente, asimismo, permitir que las transferencias al exterior de las utilidades de los nuevos capitales que permanezcan en el país, registrados conforme a la previsión del artículo 5º, se realicen a partir de los dos años de la inscripción.

Para zanjar las dificultades que ordinariamente han presentado las reinversiones de capital de las empresas extranjeras en diversos países, el derecho de transferencia de utilidades al exterior se extiende hasta el 8 % del capital. El excedente de utilidades líquidas y realizadas por encima del citado por ciento será considerado capital nacional y quedará definitivamente incorporado al país. Por lo tanto, no podrá sumarse al capital originario para el conjunto de utilidades susceptibles de remesa al exterior, ni ser repatriado al país de origen de los capitales.

Con respecto al reembolso de los capitales registrados, el artículo 10 dispone que una vez cumplidos los primeros diez años, contados a partir de la inscripción originaria, podrán transferirse al exterior incluyendo el monto correspondiente a las utilidades que se capitalicen de conformidad con los artículos 8º y 9º.

Estos reembolsos de capitales deberán hacerse en cuotas anuales del 10 % al 20 % de la inversión, lo que implica asegurar el reintegro de los capitales extranjeros en plazos que oscilan entre un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años.

Finalmente, en el artículo 12 del proyecto se ofrece un estímulo adicional a los empresarios extranjeros que quieran incorporar o ampliar sus capitales en forma de maquinarias, equipos mecánicos o elementos científicos. Esta modalidad ha sido ya adoptada en diversas legislaciones latinoamericanas, especialmente en el caso de Chile y Colombia. En verdad, no todas las inversiones extranjeras se realizan ordinariamente en divisas, es decir, en efectivo, pues una buena parte de las mismas sólo viene en forma de maquinarias y otros bienes de capital que no se producen en las economías internas de los países que están en desarrollo. Pero no todas las maquinarias o bienes de capital importados deberán ser eximidos del pago de los derechos aduaneros. En la reglamentación de la ley será conveniente aclarar qué tipo de importaciones de capital gozarán de la franquicia aduanera, aspecto que, en principio, deberá asociarse a los diversos proyectos básicos establecidos en los planes de gobierno para el desarrollo económico del país. Además, dichas importaciones podrán ser beneficiadas declarándolas de interés nacional, cuando convenga comprender las nuevas actividades en las disposiciones de la ley 13.892 de fomento y defensa de la industria.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo nacional tiene la certeza de que la presente ley merecerá la aprobación de vuestra honorabilidad, ya que, al proponer el *status* para las inversiones de capital extranjero que deseen colaborar en nuestro desarrollo económico, se cumple, además, con previsiones del segundo Plan Quinquenal.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Alfredo Gómez Morales. — Miguel Revestido. — Pedro José Bonanni. — Antonio F. Cafiero.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra, para formular una indicación previa.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Antes de comenzar la consideración del proyecto de ley, desearía que el señor presidente nos hiciera saber si asistirá al debate algún representante del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Benítez). — No han sido invitados por la Honorable Cámara los señores ministros del Poder Ejecutivo.

Sr. Ravignani. — Hago indicación de que se invite a concurrir a la sesión a los señores ministros del equipo económico.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la indicación del señor diputado por la Capital.

—Resulta negativa de 64 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Está en consideración en general el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Degreef. — Señor presidente: la inversión de capitales extranjeros en la República Argentina se inicia, prácticamente, en los albores de la Independencia.

Con anterioridad es bien conocida la situación que imperó en el país durante la época del virreinato. Por ese entonces, poco era lo que se producía y escaso el interés en producir más; el comercio casi no existía y las necesidades eran reducidas. Las riquezas naturales eran escasamente aprovechadas: nadie ignora el caso de las vaquerías que determinaban el sacrificio de numerosos animales con el solo propósito de aprovechar el cuero. El comercio con el exterior estaba limitado por el monopolio que de él hacía la corona; aun así, los envíos de cueros y algunos escasos productos como el sebo, sólo eran posibles en oportunidad de la llegada de los navíos de registro, los cuales solían demorar varios meses en puerto antes de completar la carga autorizada. La industria era oficialmente despreciada y para ejercer el comercio debía vencerse serias dificultades administrativas.

El progreso en estas condiciones era muy lento y sólo lograban pingües negocios quienes se dedicaban al contrabando por vía atlántica de mercaderías que tradicionalmente se incorporaban al país por vía Pacífico, para llegar en carretas a través de las aduanas de Tucumán y Córdoba. Esta situación influyó en el ánimo de los habitantes de Buenos Aires y fué una de las causas determinantes de la Revolución de 1810.

Recién en 1778, luego de crearse el consulado de Buenos Aires, se dictó la reglamenta-

ción de comercio libre que facilitó las transacciones con la madre patria, y finalmente se produjo el acontecimiento de mayor trascendencia continental de esa época, es decir, la Representación de los Hacendados del Río de la Plata.

Las consecuencias de este acto y de otras muchas gestiones fueron la apertura del puerto de Buenos Aires al libre intercambio, con lo cual se dió un gran paso hacia el progreso del país, que pudo, a través de un mayor comercio externo, abastecerse de los elementos que habrían de vigorizar su economía. La participación posterior de Inglaterra en el comercio con el Río de la Plata creó las condiciones y dió lugar al nacimiento de vínculos que en adelante harían factibles las inversiones de capital inglés en la República Argentina.

Fuera de algunas radicaciones de capital extranjero de origen privado, cabe expresar que en 1828 se dictó una ley autorizando al gobierno a contratar un empréstito de circulación exterior, con el propósito de construir un puerto para la Capital. Este empréstito estaba también destinado a dotar de poblaciones a las nuevas fronteras con los indios, levantar tres ciudades en la costa patagónica y proveer de aguas corrientes a la Capital. Este plan de gobierno se había concebido sobre la base de una operación ideal, pues no se sabía dónde tratar, ni si habría quien aceptase poner su dinero en estas tierras. Pasaron dos o tres años y el empréstito no se lograba. Ello determinó la misión de algunos comerciantes, como don Félix Castro, don Braulio Costa, don Juan P. Sáenz Valiente, argentinos, y dos ingleses, don Guillermo y don Juan Pedro Robertson, quienes lograron el empréstito en Inglaterra, entregando su importe a la provincia de Buenos Aires.

Con anterioridad, el embajador Parish había sido autorizado por Canning para negociar un tratado de comercio y amistad, luego de las seguridades que recibiera de aquél, sobre el bienestar del país y la estabilidad del gobierno. Cuando llegó el dinero del mencionado empréstito, el gobierno se encontraba frente a una difícil situación. Existía la amenaza de una guerra con el Brasil. Además se tropezaba con imposibilidades técnicas para levantar las ciudades, colocar las aguas corrientes y fundar pueblos en la frontera con los indios. Por otra parte, el crédito comercial de plaza era sumamente restringido por lo que era preciso tonificarlo con una inversión de fondos frescos. Ello determinó que se otorgaran créditos a comerciantes que ofrecían garantías suficientes, a un interés discreto: $\frac{3}{4}$ por ciento mensuales (el empréstito había sido contratado al 6 por ciento).

Luego se inició la guerra con el Brasil y estos fondos contribuyeron a costear las dificultades producidas por la misma.

Los intereses y la amortización del empréstito no pudieron ser abonados sino hasta muy avanzada la década de 1840, quedando cancelado definitivamente a principios de este siglo, pero lo cierto es que este empréstito, de cinco millones de pesos fuertes, que no resultan íntegros, costó al país entre intereses atrasados y gastos, 26.000.000 de pesos de la misma moneda.

Su pago, naturalmente, sirvió para demostrar al exterior que los argentinos cumplíamos, aun a tan elevado costo, con nuestros compromisos; y tuvo la virtud de dejar la puerta abierta para seguir pidiendo prestado.

No es oportuno en este momento el análisis del comportamiento del capital extranjero en la Argentina, pero debe destacarse que tanto los empréstitos oficiales como las inversiones privadas, constituyeron, hasta no hace muchos años, la característica saliente de nuestra estructura económica. Bastaría consultar las memorias del Ministerio de Hacienda para tener una idea de cómo se comprometió a la Nación con las deudas a corto y largo plazo contraídas con el extranjero. Sólo deseamos realizar aquí la contribución al progreso del país, prestada por muchos inversores, especialmente los que radicaron definitivamente sus capitales y confiaron en la futura grandeza de la Argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Con lo expuesto, queda dicho que las primeras inversiones realizadas en el país fueron de origen inglés. En 1936 las inversiones británicas en la Argentina eran superiores a las realizadas en cualquiera de sus dominios, incluso Canadá, y oscilaban en 5.600.000.000 de pesos. Estas inversiones estaban colocadas, principalmente, en los ferrocarriles, empresas comerciales e industriales y deuda pública. Este total disminuyó lentamente durante la guerra, para reducirse entre 1947 y 1948, con motivo de las nacionalizaciones efectuadas, a 709.800.000 pesos. En la actualidad, de acuerdo con informaciones de origen británico, deben superar ligeramente los 560.000.000 de pesos.

Las inversiones francesas en la Argentina fueron las primeras en seguir en importancia a las inversiones británicas. Ellas se colocaron principalmente en bancos, ferrocarriles y puertos. En 1912 se calculaban que las mismas ascendían, aproximadamente, a 1.200.000.000 de francos oro. Estas inversiones, hacia 1940, ascendían, de acuerdo con una estimación, a 481.000.000 de pesos.

Los primeros pasos de los consorcios alemanes en el país se dieron poco después de la batalla de Caseros. En 1863 se estableció una empresa colonizadora alemana de Francfort que, a cambio de grandes extensiones de tierra en la provincia de Santa Fe, introducía inmigran-

tes. Más tarde, los alemanes crearon empresas comerciales, industriales y bancarias.

En 1887 se fundó la Compañía Telegráfica Telefónica del Plata. Poco más tarde, en 1888 y 1890, los banqueros alemanes concedían los primeros empréstitos estatales.

En 1889 se fundó la Brasserie Argentine Quilmes y cuatro años después, en 1893, se fundó, también en Buenos Aires, el Banco Alemán Transatlántico. Algunos años más tarde, en 1898, apareció el grupo eléctrico germánico creando la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad. A principios de este siglo los negocios alemanes en la Argentina se habían activado y los títulos de inversiones se colocaban en cantidad creciente en la bolsa de Berlín.

De acuerdo con los datos de un escritor francés, Paul Walle, el capital alemán invertido en la Argentina ascendía en 1912 a unos 400.000.000 de francos oro, siendo superado solamente por el de Inglaterra, con 4.376.000.000 de francos oro, y por el de Francia con 1.210.000.000.

Las inversiones del capital yanqui aparecen de una manera abierta y directa en la economía argentina, recién en la primera década de este siglo. Las inversiones en servicios públicos sólo ascendían en 1897 a 700.000 dólares, y en 1908 ya cubrían un millón de dólares. Recién después de 1914, Estados Unidos invirtió sumas importantes en nuestro país, como consecuencia de la retracción causada por la primera guerra mundial.

Las inversiones privadas norteamericanas se realizaron principalmente en industrias manufactureras, transportes, comunicaciones y servicios públicos, industria petrolífera, en el comercio, en la minería, en la agricultura, fundición, finanzas, seguros, etcétera. Las inversiones que constituyeron el renglón más importante fueron las de deuda pública.

El grueso de las inversiones de otros países como Suiza, Bélgica, Italia, España, Holanda, Suecia y Noruega se colocó principalmente en las empresas privadas y, en mucha menor magnitud, en deuda pública, ferrocarriles y otros servicios públicos.

Muy difícil resulta la comparación de las cifras de inversiones extranjeras por el distinto origen de las fuentes de información y por los errores, deliberados o no, en que pudo incurrirse al prepararlas. Dentro de estas lógicas limitaciones, se suministrarán a continuación algunos de los cálculos realizados.

El total de las inversiones extranjeras en la Argentina muestra, a través de los distintos cálculos de los más autorizados autores, la siguiente evolución: Guillermo A. Schwenke da para 1910, 2.256.000.000; A. B. Martínez da para 1913, 2.752.143.333; el mismo autor calcula para 1917, 3.882.323.750; el mismo autor para 1924 da 3.360.000.000; Alejandro E. Bunge

da para 1924, 2.640.000.000; Vernon 'Lovell Phelps da para 1924, 3.200.000.000; Alejandro E. Bunge da para 1927, 3.091.000.000; The South American Hand Book (octava edición) da para 1931, 4.032.000.000; G. Butter Shewell da para 1932, 4.273.000.000, y Vernon Lovell Phelps da para 1932, 4.100.000.000.

Hacia 1940, una estimación del Instituto de Estudios Económicos del Transporte dada la distribución de los capitales extranjeros invertidos en la Argentina, en la forma que se detalla en un cuadro cuya inserción solicito desde ya a la Presidencia.

El curso posterior de las inversiones extranjeras ya es lo suficientemente conocido. La encuesta celebrada por el Banco Central de la República Argentina, al 31 de diciembre de 1949, contiene la información oficial más reciente y solicito también su inserción.

Conviene señalar con todo énfasis que hasta hace muy pocos años el país solucionaba sus problemas financieros mediante la contratación de empréstitos en el exterior. Desde la revolución justicialista impera, felizmente, otra política. Es que ahora se tiene presente que cuando se invierten capitales extranjeros en servicios públicos e industrias quedan asociados en forma transitoria o definitiva al país y siguen solidariamente con éste las oscilaciones de la economía. Casi podríamos decir que ganan cuando el país gana y que pierden o dejan de ganar cuando las variaciones cíclicas alcanzan una faz depresiva. Pero, es más, ahora se procura que estas inversiones extranjeras se incorporen al país en función social, asegurándoles en compensación una ganancia justa y un tratamiento digno.

Por el contrario, los capitales invertidos en la deuda pública exigían un servicio continuo, regular y exacto, pues de no ser así podría comprometerse el crédito del país y ello determinaba que su atención llegase a constituir, a menudo, un gravoso problema para la economía nacional, cuya solución exigía la entrega anual de nuestra producción, para luego tener que pedir nuevamente otro empréstito que, muchas veces, fué acordado entregándonos nuestro propio dinero congelado en el exterior y sobre el cual, con dantesco sarcasmo, teníamos que pagar intereses.

Desde la época de la emancipación, como ya queda dicho, hasta la organización nacional, el único antecedente de importancia y repercusión internacional que se registra como inversión de capital extranjero en el país lo constituye el famoso empréstito de la casa inglesa Baring Brothers & Co. Esta firma facilitó al gobierno argentino la suma de un millón de libras esterlinas, que en la práctica resultaron nominales y que, en medio de las extraordinarias dificultades políticas y económicas, fueron pagadas íntegramente, con verdadero sacrificio y muy alto

A partir de este primer acercamiento de la banca inglesa, la República comenzó a ser objeto de la atención de los centros financieros extranjeros, que veían en la naciente economía del país un campo propicio y altamente remunerativo para sus capitales.

Los riesgos de inversión de empresa quedaron siempre compensados con las complejas modalidades impuestas como condición. Así podemos recordar desde altos intereses, tarifas diferenciales, cadenas de empresas recíprocamente subsidiarias, donde las bajas de unas se compensaban con las altas de otras; hasta las concesiones garantizadas en un mínimo de rendimiento o conjunto de explotaciones, que constituían verdaderos mercados de consumo de la producción de las metrópolis inversoras o prestamistas. Sirvan de ejemplo las tarifas ferroviarias de carga, que hacían soportar los costos a la mercancía que penetraba hacia el interior, y, en cambio, aligeraban los precios de nuestros productos destinados al extranjero; las usinas termoeléctricas diseminadas por todo el país, verdaderos mercados de consumo encadenados hasta ahora al florecimiento de explotaciones carboníferas como las de Cardiff; concesiones de servicios públicos de transportes de carga y de pasajeros que, por igual proceso, aseguraban la colocación de manufacturas foráneas bajo la forma de material rodante, aceros, repuestos y hasta de nuestros propios cueros y lanas que después de un proceso industrial regresaban como tapizado, mantas, uniformes, etcétera.

No es que desconozcamos la importancia y beneficios que reportan para un país insuficientemente desarrollado en su economía, la radicación o inversión de capitales foráneos. Nadie niega que los capitales, cualquiera sea su origen o naturaleza, buscan la mejor colocación e imponen, si pueden, las condiciones más adecuadas a su seguridad, primero, y luego a su rendimiento o mejores formas de transferencia, repatriación, capitalización de utilidades, baja amortización, aguamiento o desdobles de inversiones originarias; todo esto es de la esencia misma de la doctrina capitalista liberal o individualista. Su orientación económica es precisamente esa, dirigir sus finanzas hacia los mercados o inversiones más remunerativas, sin tener en cuenta, como uno de sus fines primordiales, la función social del capital. Si en las inversiones o explotaciones promovidas por el capitalismo foráneo o el individualista se obtiene algún beneficio social, real o aparente, será un medio más de penetración o mejor presentación, pero nunca un fin o propósito, móvil de la operación.

Si bien es cierto que esta concepción puede, dentro de un medio adecuado para el individualismo, producir un gran desarrollo económico, no es menos cierto que por este procedimiento, hábilmente dirigido, se puede llegar a estructurar la economía de un país escasamente

desarrollado, de tal manera que toda su producción, en el sentido más amplio del concepto, esté naturalmente dirigida a servir a otra economía rectora, de la cual se convierte en servidora económica.

Es así, entonces, y por estas razones, señor presidente y señores diputados, que sin desconocer los beneficios reales y aparentes que produjeron los capitales extranjeros invertidos en el país, podemos declarar con verdad que ellos no fueron obra de la filantropía financiera y si la obra de hombres sabios, diestros y seguros financistas, que invirtieron o asesoraron a capitales en negocios firmes, de larga explotación, de certera amortización y que, por sobre todas las cosas, estaban respaldados por el honor de la Nación, que nunca defraudó a sus inversores extranjeros. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

A medida que la economía del país iba adquiriendo capacidad y desarrollo, se pudo observar el fenómeno de que ciertas explotaciones o inversiones llegaban a su punto de saturación. Habían concluido su ciclo económico altamente remunerativo. La curva ascendente de sus operaciones primero se detenía y luego comenzaba el descenso; y en lugar de liquidar a tiempo, renovar la explotación o dirigirla en otros sentidos, las empresas pretendieron forzar la ecuación económica de los negocios, haciendo cargar con el pecado de su avidez al gobierno, a la Nación o a sus habitantes. Sirvan de ejemplos la muy larga y sorda lucha de las empresas ferroviarias extranjeras con los planes de vialidad nacional. El riel contra el camino era la defensa del abanico de hierro, cuyo mango estaba en el puerto de Rosario y de la Capital Federal, en detrimento de la evacuación transversal hacia las vías fluviales y costeras marítimas, más racionales y más baratas.

Los ferrocarriles servían al puerto de la Capital, quizá el peor emplazado y el más caro del mundo por su costo de mantenimiento para dejarlo libre al acceso de los barcos de ultramar de gran calado. El puerto de Rosario, de capital foráneo y también tributario de esa red, gozó de buena fama como inversión. Era considerado el tercer negocio de concesión del mundo, en la época de la máxima de la curva de su rendimiento.

La maravillosa concepción y el mérito de la técnica de la recuperación económica de la Nación, obra ciclópea por sus proyecciones y breve término de su afianzamiento, pese a quien pesare, es del actual presidente de la República, el general Perón, líder de esta revolución social y del movimiento justicialista argentino. (*Aplausos.*)

Queremos dejar expresa constancia ante nuestros ciudadanos, y ante el mundo, que no combatimos al capital, sino al capitalismo liberal individualista. Y aun a este mismo no lo combatimos sino saliese de la esfera puramente particular o privada; pero sí se hace ne-

cesario la intervención compensatoria del Estado, como órgano de regulación económica, en tanto y en cuanto desborde su influencia o repercusión social negativa saliendo de la relación contractual privada hacia otros centros productores de la República o se coloque en contra de los intereses generales de su población.

No combatimos al capital como concepto económico; ello equivaldría a combatir el trabajo mismo, pues no es otra cosa el capital que trabajo ahorrado y acumulado como excedente, para aplicar a un ciclo posterior económico.

Pero si llegáramos a admitir que para la formación de ese capital podemos apoderarnos de parte de salarios no pagados, de producciones no justamente retribuidas, y negar un régimen de asistencia y previsión para nuestros obreros, peones o pequeños productores, ese capital así logrado atenta contra la humanidad entera, no sólo contra nuestra población, y será un resultado de aplicación cruda del sistema capitalista liberal individualista, donde el hombre será siempre el lobo del hombre.

Abramos grandes las puertas al capital que venga con fines sanos y equilibradamente económicos y, además, en función social.

Asegurémole como buenos justicialistas una justa retribución adecuada a su riesgo, importancia y fines.

Démosle un régimen claro, seguro y de buena fe para sus transferencias de utilidades lícitas, repatriación racional y prudente capitalización.

Así, señor presidente y señores diputados, habremos cumplido con todas las exigencias que se consideran fundamentales en esta materia, donde no es menos importante individualizar los capitales y dirigirlos, con sentido económico, hacia las inversiones más productivas y beneficiosas para la Nación.

El Poder Ejecutivo, como poder administrador legislativo, ha enviado su mensaje y proyecto de ley sobre la materia, de amplio conocimiento en el país y fuera de él. La prensa y la opinión pública de los centros afectados, o influidos por sus previsiones, han difundido ampliamente su mecánica y su contenido normativo.

En esta materia, como en muchas otras, ya no hay secretos ni escondidos. Quien sostenga lo contrario, o no conoce los problemas o conoce demasiado la materia y usa sus giros técnicos retóricos con fines poco confesables o para sembrar la confusión.

En nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que me honro en presidir, quiero hablar con palabras sencillas y al alcance de todos los ciudadanos que nos confiaron el mandato de representarlos para dictar las leyes de la Nación.

La documentación contenida en los informes y trabajos de las conferencias internacionales promovidas por las Naciones Unidas para la

América latina y Europa, así como también para la organización de los Estados americanos, constituyen una sólida fuente de información para el estudio de las inversiones de capitales extranjeros. Para no fatigar la atención de la Honorable Cámara, pido también la inserción de las referencias de la documentación precitada y, además, de las cifras y cuadros que servirán de segura guía para los que deseen ahondar el estudio de este proyecto.

En cuanto al monto de los capitales extranjeros invertidos en el país, tendremos que atenernos a los resultados de la última encuesta realizada por el Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 1949, cuyas cifras no podrían actualizarse sino por igual procedimiento, es decir, efectuar otro censo, lo que demandaría un tiempo del que no disponemos; y aunque esta tarea pudiera cumplirse sin mengua de nuestra labor legislativa, poco o nada agregaría a las razones y fines que se persiguen con este proyecto.

La suma de los 7.300.000.000 que totalizan las inversiones extranjeras, según los datos de que disponemos, podrá ser analizada en cuanto a la discriminación de su origen en las planillas correspondientes.

La repatriación y transferencias de utilidades de los capitales actualmente invertidos o radicados en el país, se rigen por disposiciones de circulares del Banco Central y de los convenios firmados con los países inversores.

El proyecto del Poder Ejecutivo no establece ningún régimen para la repatriación de capitales nacionales en el exterior.

Ello se debe a que no merece una consideración especial este aspecto del problema. No obstante, aunque dentro de una referencia tangencial se pueden considerar dos situaciones en que podrán encontrarse estos capitales nacionales invertidos en el extranjero: a) los que han salido cumpliendo con todos los requisitos legales; b) los que emigraron en violación de las leyes y disposiciones pertinentes.

Los que hubieran salido en regla, difícilmente volverán, porque se hallarán arraigados en el lugar de destino y los pocos que se reincorporaren no justificarían la creación de un régimen especial, siéndoles de aplicación las normas comunes del régimen vigente sobre cambios. Los transferidos ilícitamente no volverán individualizados como tales, sino bajo algunas de las formas que les aseguren llegar como capitales nuevos haciendo irreconocible su origen. En tal caso, estas situaciones se vincularían más que a un régimen económico-financiero a problemas fiscales penales o a la conveniencia de dictar una ley de amnistía.

Una de las críticas más injustas a la par que más peregrina que se han formulado contra la política financiera del actual gobierno consistió en que, precisamente, uno de los fundamentos

más sólidos de la independencia económica argentina.

Se martilló inútilmente a la opinión pública con el estribillo un tanto infantil de que habíamos gastado y hecho mal uso de las reservas de oro acumuladas durante los años de prosperidad económica. Nada más falso y fácil de demostrar así. Las dos aplicaciones más importantes de esos recursos fueron: a) La compra de materiales que hoy valen diez veces más y salvaron la distribución y colocación de nuestra producción, y b), el brillante y patriótico rescate de la deuda pública externa y de los servicios públicos concedidos a empresas extranjeras.

Las adquisiciones enunciadas en el punto a) fueron ampliamente explicadas por el Poder Ejecutivo en sus mensajes y disertaciones conexas, en su oportunidad. Las del punto b) nos permiten tomar con nuestras manos y mentalidad argentinas, los resortes más sutiles y productivos de nuestra economía, antes dirigida desde los famosos directorios locales y foráneos, casi siempre integrados los primeros por nuestros nefastamente brillantes abogados, profesores universitarios y hábiles políticos de un régimen definitivamente caduco. Y si esto pareciera poco, siendo tan mucho, la repatriación de la deuda externa será siempre un título muy honroso para su ejecutor, merecedor de la gratitud nacional. (Aplausos.)

Calculado el tipo oficial comprador de 336 pesos aproximadamente por cada 100 dólares, la repatriación de estos valores que asciende a cerca de 3.423 millones, puede discriminarse de la siguiente manera: a) ferrocarriles, 2.055 millones; b) empréstitos nacionales, 623 millones; c) empréstitos provinciales, 334 millones; d) teléfonos, 371 millones; y e) servicios sanitarios de Rosario y provincia de Buenos Aires, 40 millones.

Sr. Weidmann. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Degreef. — Como deseo continuar esta exposición, sin ser interrumpido, pido disculpa al señor diputado por no acceder a su pedido.

Sr. Weidmann. — Solamente quería decir que actualmente la deuda pública es mucho más grande.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Degreef. — Si a esto agregamos los capitales privados, cuyo monto asciende, al mismo tipo de cambio, a 335.000.000 de pesos moneda nacional, colocados a corto plazo y de fácil liquidación, puede comprenderse, clara y honradamente, cuánto se ha hecho en esta materia por el actual gobierno de la Nación y cuánto dejaron de hacer los hombres que otrora tuvieron en sus manos el destino del país, pero que no supieron sacudir este mismo yugo con menos esfuerzo personal, con menos dinero

público y con menos sacrificios para este pueblo bien llamado maravilloso por nuestro líder y, afortunadamente, presidente de los argentinos. (*Aplausos.*)

Las cuestiones que puedan suscitarse con respecto a las remesas que pudieran efectuar los técnicos u obreros extranjeros de las empresas que radiquen sus capitales en el país, pueden ser contempladas por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo y quizá fuese también oportuno establecer las proporciones transferibles en los mismos convenios a celebrarse con los inversores.

El hecho de que algunas legislaciones prevén especialmente estos casos, como la de Egipto, que autoriza remesas de hasta un 50 % de las remuneraciones del elemento humano contratado, no significa que tengamos nosotros que incorporarlo en la misma ley, en forma expresa, pues su redacción, prudente y elástica, permitirá al poder administrador, por vía reglamentaria o contractual, resolver satisfactoriamente estos casos.

Con referencia al régimen de prioridades a establecerse entre las diversas explotaciones que serán objeto de la radicación de los capitales extranjeros, podemos informar que tal ordenamiento será condicionado a los planes preestablecidos por el gobierno con el propósito de afianzar, acelerar o estimular el desarrollo económico del país.

Las prioridades, en principio, ya están determinadas en el segundo Plan Quinquenal, sin perjuicio de que se contemplen otras situaciones que se considerasen de interés nacional y que no hubiesen sido expresamente enunciadas dentro de la generalidad de algunos de los aspectos del mencionado plan de gobierno.

Estas mismas prioridades estarán sujetas en cada caso, en el momento de su consideración concreta, a las relaciones de oportunidad, conveniencia o necesidad de las explotaciones. Porque bien puede darse el caso de inversiones que resulten convenientes, pero no necesarias o, simplemente, inoportunas, en el momento que se considere la inversión o radicación frente a otras exigencias de la economía o finanzas del país. Así, por ejemplo, si nos hicieran dos propuestas para instalar en el país plantas de electricidad, una de 100 usinas termoeléctricas y otra de 10 hidroeléctricas, nadie podrá desconocer su extraordinaria conveniencia y necesidad, pero entre una y otra propuesta habrá una diferencia fundamental.

Es verdad que en este momento económico del país la electrificación constituye uno de los problemas más serios a resolver, pero esto no quiere decir que habrá de hacerse a cualquier precio y que los técnicos de producción y que carece de signifi-

ficado económico la fuente energética que habrá de usarse para lograr a su vez esa energía eléctrica.

Si aceptáramos la primera propuesta de las 100 unidades locales termoeléctricas en detrimento de las 10 hidroeléctricas, de igual capacidad que las anteriores, sin analizar las condiciones previas de su oportunidad, conveniencia o necesidad, cometeríamos el grave error de atarnos por muchos años a un sistema de producción de electricidad que exigiría el consumo de cantidades enormes de combustibles de fuentes perecederas y de los cuales no poseemos yacimientos en explotación en cantidad suficiente, lo que nos obligaría a su importación con el consiguiente drenaje de divisas.

Las otras diez unidades, de igual capacidad de rendimiento, estarían alimentadas por la hulla blanca, obtenida del aprovechamiento de las caídas naturales de agua o de las obras de arte que se construyan para su captación, almacenamiento, regulación y consiguiente aplicación como fuerza motriz de las turbinas generadoras.

Y quizá la solución no esté tampoco, en términos absolutos, en la aplicación excluyente de uno u otro sistema, sino en su racional combinación, atendiendo a las características regionales de su establecimiento, posibilidades de suministro energético, emplazamiento actual o futuro de emporios industriales, transporte, etcétera.

Aquí estaría precisamente justificado el momento analítico de discriminación de factores determinantes de la elección del sistema, o de la racional combinación de ambos.

En la Capital Federal, por ejemplo, nadie sostendría, atento el actual desarrollo de la ciencia o del arte del aprovechamiento de la fuerza del agua, que podría propiciarse la instalación de usinas hidroeléctricas; sería más que un absurdo, un simple imposible por ahora. Aquí tendríamos que contentarnos con renovar las grandes máquinas, algunas detenidas por desgaste hace muchos años y otras en incesante trabajo desde hace más de treinta.

Esto habrá que hacerlo pronto; no podemos mover o trasladar los emporios fabriles de la Capital Federal, o del Gran Buenos Aires hacia el interior, para llevarlas cerca de las nuevas plantas eléctricas y tendremos que reforzar las líneas de alimentación, trayendo corriente desde afuera, como se previó oportunamente con la usina de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Este refuerzo se explica; quizá sean necesarios otros, cuando comprendamos que las usinas locales de la Capital suministran corriente eléctrica hasta para la misma ciudad Eva Perón y sus industrias.

Y por sobre todas estas consideraciones acerca de la oportunidad, conveniencia y necesidad, priva el fin económico-financiero de la

ley, es decir, llegar por vías directas o indirectas a la obtención o economía de divisas.

Lo que dejamos dicho sobre este problema de la electrificación del país sirve para todas las aplicaciones o destinos que se darán a los capitales que lleguen o se ofrezcan al país, previa su individualización y registro, ya se trate de industrias extractivas, genéticas o de transformación, de conformidad con el régimen legal y reglamentario que le garantizará la Nación.

Así, si algunos aspectos de la política económica a seguir con el agro, la pesca lacustre o de río, y aún la de altura y caza marítima no estuvieran expresamente tratados en su especificidad, los principios generales de la economía de esta ley, más los que sean de la esencia misma de la explotación que se considere, darán al Poder Ejecutivo los medios legales y reglamentarios que necesitará, para impulsar el desarrollo de nuestra floreciente economía.

Señor presidente, señores diputados: antes de informar sobre el texto del articulado, quiero decir a la Honorable Cámara que nosotros nos hemos hecho eco de todas las observaciones que nos han llegado; y además, de las que personalmente nos hemos preocupado por conocer.

Entre las objeciones que se formulan en contra de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, son tres las que recogemos de una manera especial, pues las demás ya quedan desvirtuadas a través de la generalidad de este informe, y las pocas que puedan expresarse aún quedarán aclaradas durante el examen del articulado y la exposición de los señores diputados que me sucedan en el uso de la palabra.

Estas tres observaciones son las siguientes: primero, la conveniencia de establecer en forma expresa en el articulado de la ley que la repatriación de capitales debe realizarse en la moneda de origen; segundo, que la ley debe contener una cláusula de garantías que asegure a los inversores extranjeros que, en ningún caso, las industrias o explotaciones financiadas con capitales del exterior radicados en el país podrán ser nacionalizadas o expropiadas por el Estado; tercero, que la ley es poco clara.

Con referencia a estos tres planteos empezamos diciendo que en buena hora han sido formuladas estas observaciones. Primero, porque es nuestra obligación escucharlas y luego aceptarlas o rechazarlas según su mérito; segundo, porque ellas demuestran una preocupación o interés por parte de sus autores para que la ley sea mejor; y tercero, porque como fuente interpretativa del espíritu de este proyecto, será la mejor guía para asegurar su más sano y fiel cumplimiento.

A la primera observación contestamos así: es tradición firme en esta materia, abonada por las más generalizadas prácticas financieras, que tanto el pago de los servicios cuanto la repatriación de los capitales que los producen, sean

realizados en la misma moneda del capital de origen. No es otra cosa, por otra parte, lo que hemos venido realizando nosotros en la gran mayoría de los casos, y sobre todo por el Banco Central de la República.

Bien, pero el hecho cierto de que tal procedimiento constituya un principio general en esta materia, sería impropio erigirlo en concepto inmutable absoluto mientras no atentara contra el interés público, y esto último habría que demostrarlo para poder tener razón.

Sin mengua de los intereses y derechos de la Nación y de los que correspondan a los inversores extranjeros, bien podemos admitir sin tortura mental, financiera o patriótica, que por la vía contractual de los convenios a realizarse entre las partes, pueda convenirse no solamente la repatriación, sino también la incorporación a nuestro país de capitales en una moneda diferente a la del país de su origen. Este procedimiento no se usará siempre, pero debemos admitir sensata y jurídicamente que nada se opone a que las partes lo elijan como el medio más útil a sus recíprocos intereses, por más flexible, oportuno o económico.

En efecto, puede darse el caso de un consorcio inversor holandés, que por sus créditos o fondos de otro origen, ofrezca traer sus capitales en dos o más monedas o divisas que a su vez convengan al gobierno argentino. ¿Qué inconveniente habría en convenirlo así para la inversión o repatriación?

Y éste es sólo un ejemplo que podríamos llevar al infinito con sólo aplicar las variantes que caben dentro de las finanzas.

No creo necesario abundar más sobre esta primera observación y creo que por vía reglamentaria el Poder Ejecutivo puede dictar las normas prácticas de aplicación para estas situaciones, que aseguren la suficiente flexibilidad del sistema, por cuanto podría convenir a las partes contratantes enviar o traer divisas, que puedan estar discriminadas o radicadas en mercados de diferente nacionalidad que la de consorcio inversor o sus capitales de origen.

La segunda observación es más fácil aun de aclarar que la primera. Primero, porque le sería de aplicación cuanto se ha dicho sobre el origen del capital, vale decir, que en el texto del convenio los inversores tendrán que estipular todas las salvedades legales para asegurarse de que la Nación no les expropiará o nacionalizará sus explotaciones dentro de un plazo determinado, con aviso previo de tiempo fijo o sin él, con derecho a tal tipo de rescate graduado en tiempo o rendimiento para una justa indemnización, etcétera.

Quedaría fuera de toda previsión contractual el caso de fuerza mayor, como necesidades de la defensa nacional o gravísimas razones de Estado, pero lo que nunca podrá negarse a los inversores extranjeros en estos remotísimos ca-

sos, es el derecho a una justa indemnización y, como ya lo he dicho anteriormente, siempre tendrán como suprema garantía la tradición honorable de la Nación Argentina. (Aplausos.)

En esta materia y sobre este último aspecto, cuando una de las partes es una nación jurídica, política y socialmente organizada, el inversor estará contratando con un Estado, persona de derecho público y como tal, podrá tener derecho en casos de graves razones de interés nacional, a revocar per se, unilateralmente, un acto de esta naturaleza, pero lo que no podrá negar nunca es la justa indemnización correspondiente. Es, pues, señor presidente, por vía de la reglamentación de esta ley y de las cláusulas contractuales de estilo, que deberán resolverse estos problemas, que en verdad no lo son y sí, sólo modalidades propias de la naturaleza de estos actos.

La tercera observación no tiene de tal sino el nombre, después de lo que queda dicho en las dos primeras. Si alguno de los señores diputados cree que el texto de la ley es obscuro, lo que corresponde es que lo funde y proponga el texto adecuado, que a la Honorable Cámara le tocará resolver.

Análisis del proyecto. Sírname de introducción al breve análisis del texto del articulado la determinación de los límites de su influencia dentro de la economía nacional. Si bien queremos abrir anchas las puertas al capital honesto y útil que no tenga una mejor aplicación en su país de origen, sólo lo deseamos cumpliendo con dos requisitos básicos o fundamentales para los argentinos: primero, que además de su destino natural cumpla una verdadera función social, y, segundo, que venga dispuesto a colaborar con los capitales argentinos, que durante este proceso de recuperación económica han demostrado eficiencia técnica, financiera y económica, suficiente y bastante para habernos colocado en el plano de superación industrial y económica en que nos encontramos en este momento legislativo, de dar un cuerpo legal orgánico y firme que nos autorice a presentarnos ante los inversores extranjeros con los mejores títulos, para inspirar su confianza y tomarlos como amigos para dar juntos el impulso financiero, y no la financiación total, que conviene a nuestra floreciente economía.

El artículo 1º declara comprendidos, dentro de los beneficios de esta ley, a los capitales extranjeros que se incorporen a las industrias o a la minería del país para instalar plantas nuevas o asociarse a las existentes, con el propósito de ampliarlas o de perfeccionarlas.

El artículo 2º dispone que los capitales extranjeros, destinados a estos fines, podrán ingresar al país en dos formas: a), como divisas y b), como bienes de explotación productiva, necesarios para la total actividad de la inversión.

Comprende, pues, la amplitud del inciso b) a toda clase de bienes, sin otra limitación prudente y racional que la de que sean efectivamente necesarios a la explotación a que se los destina. De esta suerte cerramos las puertas al contrabando legal, a la introducción de bienes innecesarios y al aguamiento o estiramiento del capital, autorizando la introducción de elementos básicos o concurrentes ineficaces por su estado, naturaleza o destino.

El artículo 3º contiene las condiciones de ingreso de los capitales extranjeros. Estas condiciones de ingreso son siete: seis de ellas son legales y una constitucional y reglamentaria del Poder Ejecutivo.

La primera condición es que las inversiones extranjeras, a que se refiere el artículo primero, deben efectuarse de conformidad con toda la mecánica y el espíritu de la ley; la segunda, que deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo, condición que lo obliga a actuar como poder administrador a la par que legislativo, al tener que dictar la reglamentación necesaria para poner en ejercicio sus propias facultades.

La tercera, al disponer que «cada caso» de inversión debe ser aprobado por separado, implica un análisis y tratativa de cada convenio, en los que podrán pactarse, sin más tope que la Constitución y la ley, las cláusulas más acordes con los recíprocos intereses de las partes.

La cuarta condición es que la inversión contribuya a las realizaciones económicas contenidas en los planes de gobierno y que, además, sean fuente directa o indirecta de la obtención o economía de divisas.

La quinta, que cuando las inversiones extranjeras se realicen en la forma que se establece en el inciso b) del artículo 2º del proyecto, es decir, como bienes físicos, este concepto es tan amplio que debe comprender a todo lo necesario, adecuado y eficiente para asegurar la más perfecta explotación económica a la actividad durante el término que exija la naturaleza de la inversión.

La diversidad de las explotaciones a que pueden aplicarse estos capitales y la compleja naturaleza de algunas de ellas hacen, más que inconveniente, imposible, dentro de la órbita legislativa, hacer una enumeración comprensiva de todos los elementos concurrentes que pueden ser necesarios para estas explotaciones.

Dentro de la generalidad de la norma, limitada al mismo tiempo por lo necesario e inherente al sistema de explotación, damos la suficiente elasticidad y ponemos un tope a cualquier abuso o demasía de pretender introducir elementos, trabajo, equipos o bienes antieconómicos.

Es al Poder Ejecutivo, en los dos momentos de la reglamentación de la ley en general y del convenio en particular, a quien le cabe la obligación y consiguiente responsabilidad de fijar

los límites de los elementos concurrentes a la más eficiente, sana y económica incorporación de este tipo de inversiones.

La sexta es una condición muy importante, pues exige que los bienes y demás elementos concurrentes de la explotación deben ser nuevos o en perfecto estado de conservación, responder a sistemas modernos de producción, y exige aún, con muy buen juicio, que sean eficientes.

Estuvo muy acertado el Poder Ejecutivo, señor presidente y señores diputados, cuando como celoso administrador proyectó esta coordinación condicional, porque por más nuevos, en buen estado y modernos que sean algunos elementos concurrentes o los propios bienes principales pueden ser o resultar ineficaces por muchas razones, como ser el clima, zona, características geológicas, geográficas, transportes, etcétera.

La séptima y última condición es que el precio de los bienes fundamentales y elementos concurrentes que integren la inversión será el de la cotización corriente en los mercados de explotación al tiempo del ingreso al país.

El artículo 49 establece que los capitales extranjeros que ingresen de conformidad con esta ley quedan sujetos a la legislación argentina y que, en consecuencia, deberán organizarse conforme con sus leyes y ajustar sus directivas económicas a los planes del gobierno.

Cumplidas tales condiciones, las empresas que se constituyan con estos capitales gozarán, además, de los beneficios que se les acuerda por la presente ley, de igual tratamiento que las empresas argentinas similares. De modo que las empresas así constituídas tendrán el régimen legal y los beneficios de esta ley, más la igualdad de tratamiento que las nacionales, más el estatuto particular del convenio que firmen con el gobierno de la Nación.

El artículo 59 dispone que para tener derecho a la transferencia de utilidades y a la repatriación del capital, de conformidad con las formas que para estos casos establecen los artículos 69 y 10, debe solicitarse la inscripción en un registro que se creará a ese efecto. Se trata, pues, de un simple registro, destinado a individualizar los capitales con todos los datos necesarios en estos casos, como ser origen, monto, destino, modalidades, plazos, etcétera.

Este registro será llevado, sin duda, por su naturaleza, por el mismo Banco Central de la República.

El artículo 69 establece que a partir de los dos años de la inscripción de los capitales extranjeros en el registro a crearse surge el derecho a transferir al país de origen las utilidades líquidas y realizadas que provengan de la misma inversión, hasta un límite del 8 % sobre el capital registrado y que permanezca en el país anualmente.

El artículo reconoce el derecho de estos capitales, una vez que han cumplido su función económica, a enviar un prudente por ciento de sus utilidades, como justa compensación de su trabajo y espíritu de empresa. El excedente de utilidades sobre el por ciento establecido podrá ser capitalizado para gozar de los mismos beneficios del capital originario y además utilizar el por ciento y procedimiento de repatriación establecido en el artículo 10.

La exigencia de que el por ciento debe ser establecido sobre el capital registrado que permanezca en el país, en cada ejercicio, se explica fácilmente, y es una doble garantía tanto para el inversor como para la Nación, pues aquél no lo podrá calcular sobre el total registrado que no permanezca en el país por haber salido como parte transferida o repatriada y la Nación tampoco lo podrá calcular sobre la suma registrada originariamente sin agregarle las cantidades capitalizadas, si las hubiere.

El artículo 79 no ofrece dificultades: se trata de las utilidades que, teniendo derecho a ser giradas al exterior, quedan autorizadas para ser capitalizadas, acrecentando el haber originario, previo su registro, como contralor contable.

El artículo 89 dispone que las utilidades no transferidas, el excedente del 8 % transferible y las no capitalizadas, que no fueren registradas para conservar su condición de capital extranjero, quedan definitivamente nacionalizadas y serán intransferibles al exterior por el régimen de esta ley.

El artículo 99 declara que tanto las utilidades capitalizadas legalmente, cuanto las utilidades que de ella provengan, gozarán del derecho de transferencia al exterior que se establece en los artículos 69 y 10 de esta ley. Se trata de la simple aplicación de un principio general en materia de capitalización, donde los intereses que se suman al capital que los produce corren la misma suerte del principal.

El artículo 10 determina el punto de partida del momento en que se tiene derecho a comenzar la repatriación del capital, si así se desea. El plazo de diez años a partir de la inscripción es una medida prudente para evitar los cambios bruscos en la economía de la producción. Igual propósito se persigue con la repatriación paulatina y graduada del 10 al 20 % anual, según se establezca, de común acuerdo con el convenio, al autorizar la inversión.

La declaración legal de que las utilidades capitalizadas, siempre mediante el procedimiento de la inscripción, tendrán la misma antigüedad que el capital originario ya ha quedado fundada anteriormente. Además es justa y congruente si se ha considerado que ha llegado a su término el ciclo económico de la empresa, y de este modo se acelera y facilita la liquidación y evacuación del capital, si así se lo desea, en un plazo no mayor de dieciséis años.

El artículo 11 es concordante con la norma contenida en el artículo 89. Se trata de lo siguiente: los capitales extranjeros que ingresaren al país para gozar de los beneficios de esta ley y que no se inscribieren en el registro, vale decir que rehuyeren el contralor financiero del Estado, perderán los derechos que acuerda esta ley a los capitales extranjeros que observen sus prescripciones, y serán considerados definitivamente incorporados al país.

El artículo 12 es autoritativo para el Poder Ejecutivo. El inciso b) contiene una franquicia aduanera de carácter proteccionista de nuestra economía y tiende a estimular el ingreso de bienes destinados a la producción, liberados de gravámenes que aligerarán su ecuación económica y que si los cobrara el Estado, entraría en contradicción con los mismos principios que inspiran esta ley: fomentar y estimular por todos los medios el desarrollo de la producción, velando al mismo tiempo por la integración e incremento de los capitales puestos al servicio de la misma.

El inciso b) acentúa más este principio proteccionista de las industrias que se consideran vitales para el país, una vez que han cruzado la barrera aduanera y están en franco proceso evolutivo de producción, gozarán de todas las medidas de seguridad y estímulo en función del «interés nacional» que ellas representan. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — La elevación de las condiciones económicas de la Nación en general y del nivel medio de vida de la familia argentina en particular, especialmente de los asalariados, depende, en su último análisis, del monto de capitales, de la relación capital-hombre en cuanto se refiere a quienes trabajan en la industria y en la producción agropecuaria y, de las aptitudes que revelen el Estado, las empresas y los individuos para llevar a ese capital a su más alta productividad.

Coincidimos, pues, en la necesidad de capitalizar al país, no porque éste se encuentre precisamente en proceso de desarrollo económico, sino porque atraviesa una crisis de descapitalización alarmante y progresiva, que ya no se puede ocultar y nos obliga, en el Congreso de la Nación, a señalar sus causas y sus síntomas para buscar el remedio tendiente a restablecer la salud económica de la República.

Esa crisis de descapitalización se encuentra agudizada hoy día por algunas razones que he de esbozar rápidamente.

En primer término, señalo la disminución de las exportaciones con buenas y malas cosechas, con buen y mal tiempo, lo que produce una merma en los términos del intercambio y, por consiguiente, una menor posibilidad de conseguir

divisas, a no ser que se obtengan, como en el presente, a costa de la disminución de las importaciones; es decir, que hay un proceso independiente incluso de la producción agropecuaria. Por otra parte, la disminución del nivel de productividad industrial, a tal punto que afirmo que nuestro país argentino es el único del mundo que, a partir de 1948, revela —y aquí tengo las estadísticas país por país— niveles decrecientes de producción; todo lo cual repercute sobre las cifras de la renta nacional, lo que es notorio a pesar de la ausencia de publicaciones oficiales y de estudios serios sobre la renta nacional hechos con discriminación de sectores económicos y sectores sociales. Esa limitación se acentúa con el aumento progresivo del número de habitantes de la República, si se relaciona este punto con el importante capítulo de la renta nacional *per capita*.

¿Qué sucede, entonces? Que el país importa laboriosamente los materiales que necesita: el 85 % de sus importaciones son de combustibles; el país se encuentra atrasado en diez años en lo que respecta a la incorporación de nuevos elementos de progreso y de técnica, a tal punto que para que nuestro país pueda colocarse, según un cálculo del ingeniero Llorens, en condiciones de equipararse a los Estados de elevado progreso técnico en materia de producción agropecuaria e industrial, se necesitarían de cuatro mil a cinco mil millones de dólares, es decir, un equivalente en pesos moneda nacional a dos segundos planes quinquenales.

Urge capitalizar al país. Tomo del mismo autor estos índices estadísticos: consumo de acero de 1905 a 1914, 150 kilogramos por habitante; en 1950, 75 kilogramos. Existencia de automotores: habitantes por automotor en 1930, 25, y 40 en 1950. Vagones: habitantes por vagón, 130 y 200 en 1930 y en 1950. Locomotoras: habitantes por locomotora: 2.700 y 4.200 respectivamente. Longitud de vías férreas: 275 y 376 respectivamente, agregando que hay una renovación atrasada de tres millones de durmientes y de parte de los rieles; aparatos telefónicos: habitantes por aparato, 39 y 42, respectivamente, para 1930 y 1950.

¿Cómo hacer esa capitalización? Rápidamente quiero enunciar el concepto que sobre ello tenemos los radicales. En primer término, pensamos que fundamentalmente la capitalización del país debe hacerse sobre la base del ahorro y de la riqueza nacional. En este sentido tenemos que señalar nuestra profunda discrepancia con la política del gobierno, en cuanto no ha realizado lo necesario en nuestro país para hacer su capitalización, por lo menos primaria, sobre la base del ahorro y de la riqueza nacional.

Sr. Gago. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Alende. — El señor diputado me disculpará que no le admita la interrupción, porque el

tiempo de que dispongo es muy limitado y tengo muchas cosas que decir.

Afirmamos nuestra discrepancia con la política del gobierno en lo que se refiere a la producción. Se ha proclamado la consigna «Producir, producir y producir» con poca seriedad...

Sr. Miel Asquía. — No es así, señor diputado.

Sr. Alende. — ...como surge a través de los discursos del señor presidente, el de Campo de Mayo, por ejemplo, cuando afirmó que la falta de productividad de los obreros solo podía gravitar en un 20 % sobre la producción, lo que él consideraba de poca significación para la producción argentina. La política demagógica ha descansado en este concepto: ya está todo hecho. Se ha repetido con motivo de la independencia económica celebrada en su oportunidad en la ciudad de Tucumán; se ha dicho también al sancionarse la Constitución de 1949 y en cada proyecto de ley del Ejecutivo, dando la sensación de que ya estaba resuelto el problema del hombre, con la consagración de la doctrina peronista, remitible por eso ya al exterior y que el hombre argentino podía descansar ahora sin preocupaciones en el goce sensual de la vida.

Creemos, por el contrario, que es necesario hablar, con el manejo sincero y honrado de las estadísticas, en este grave momento de la situación argentina, para decir a todo el pueblo con sensatez y con responsabilidad que hoy más que nunca hay que exaltar las fuerzas del trabajo, que el país para salvar su situación tiene que trabajar y producir, porque en el trabajo, en la producción y en la creación de riqueza están las posibilidades y el futuro destino económico de la República.

Hay que establecer en el país un ambiente de seguridad y de estabilidad jurídica, de respeto entre los sectores de opinión, sin rehenes de guerra y sin estado de guerra, para que cada sector pueda decir su palabra patriótica, con inspiración, sin limitaciones, sin ofensas y sin mordazas.

Sr. Astorgano. — ¡Si los señores diputados hablan siempre!

Sr. Alende. — La política que hemos señalado y que consideramos necesaria para conseguir la capitalización tiene como base el trabajo y la riqueza argentina. La política de pleno empleo para la plena producción a la que nos referimos al debatirse en esta Cámara el presupuesto general, sin cuya premisa indispensable, toda la política de plena ocupación que ha señalado el señor presidente de la Nación, es un contrasentido, sin dejar de reconocer que pueda revestir una importancia social determinada.

Igualmente hemos criticado reiteradamente la inflación, porque si bien es cierto que en un primer Estado la inflación produce un estímulo de la ocupación y de la productividad, llega un momento en su marcha evolutiva en que esa

ocupación y ese aumento de la producción no sigue el mismo ritmo de la tendencia inflatoria y entonces aparece el desnivel entre la superabundancia de medios de pago y la existencia real de los bienes y servicios con que cuenta la Nación. Es entonces cuando llegamos a situaciones económicas como la presente, que provocan el envío de proyecto de ley del Poder Ejecutivo como el que discute la Cámara

Mucho podría hablarse en esta materia, pero el tiempo urge. Podríamos referirnos al uso improductivo de las divisas, que también hemos señalado. Habrá que averiguar en qué medida la superabundancia de divisas, que en cierto tiempo tuvo el país, han disminuido correlativamente a la incorporación de bienes de capital que el país necesitaba y en qué medida se habrán importado artículos no esenciales para el usufructo de una determinada clase social, en qué medida, incluso, habrán servido las divisas para facilitar las transferencias y hasta qué cifra habrán podido evadirse capitales, comparándolos con los saldos que existían al 30 de julio de 1947, de 729.000.000 de dólares depositados en bancos de Estados Unidos como capitales latinoamericanos.

En resumen, esta generación, que ha recibido un saldo de errores del pasado, reclama el derecho de resolver la situación presente de la economía argentina con su propio sacrificio y con su propio esfuerzo, para que esto no repercuta ni grave, como ha de suceder si se vota este proyecto, sobre las generaciones del futuro, pues los hombres de aquí a veinte años habrán de palpar sus consecuencias. En ese sentido reiteramos lo que manifestamos en la primera sesión, cuando tuvo entrada este proyecto de ley, en cuanto se refiere a un cambio de la línea económica del Poder Ejecutivo, como se evidencia con la lectura de documentos o de discursos pronunciados en otra hora. Tengo aquí aquel célebre discurso en que expresaba el señor presidente: «algunos traficantes que existen en el país afirman que no tenemos dólares». Y preguntó a su auditorio: «¿Han visto ustedes alguna vez un dólar?», ignorando que todo el drama de la evolución económica mundial se encuentra en la actualidad provocado porque una sola nación tenía antes de la segunda guerra mundial el 70 por ciento del oro del mundo; y después de la guerra, ya en 1948, tenía el 50 por ciento, cifra que, seguramente, se habrá acrecentado en la fecha; y que la situación de ese país, que importa tan sólo el 3 por ciento de sus ingresos nacionales, está gravitando poderosamente en la evolución económica mundial y en el intercambio de los pueblos.

Decía el señor presidente: «¿En qué consiste nuestra independencia económica? En poca cosa, señores: en que no se lleven para otras partes, y se distribuyan los grandes consorcios capitalistas el producto de la riqueza argentina

que nuestros trabajadores arrancan a la tierra o aumentan transformándolo con la industria.»

Ahora viene este proyecto de ley de beneficio para los capitales extranjeros. ¡Amarga confesión de derrota de la política del Poder Ejecutivo!

Por nuestra parte, hemos de dar a conocer el concepto con que labora el sector de la Unión Cívica Radical. Ratifica la base fundamental de la capitalización del país sobre el ahorro y la riqueza nacional, porque creemos que la Argentina y Latinoamérica se juegan en la valoración de ese concepto, su propio destino independiente como Nación y como afín comunidad humana.

En cuanto a la acción de los capitales extranjeros, concretamente sostenemos la existencia de tres áreas fundamentales. Una de ellas, de capitalización social, en la que debe actuar exclusivamente —óigase bien— el Estado, ni el capital privado argentino, ni el capital extranjero. Me refiero concretamente al caso del petróleo.

Otra: la de la industria nacional en desarrollo, en la que creemos que no debe permitirse la competencia del capital extranjero.

Por último, la tercera, en la que puede admitirse y considerarse progresista la acción de las inversiones extranjeras, debido al insuficiente desarrollo y a las escasas perspectivas de la industria nacional.

¿Cuáles son los hechos doctrinarios que gravitan sobre el pensamiento radical? Al introducir en nuestra plataforma electoral, en su punto 12, la consolidación de la industria, la necesidad de la creación de una industria pesada y el desarrollo de nuevas técnicas y formas industriales, hemos roto, el esquema tradicional de la división del trabajo, es decir, el esquema que establecía la existencia de países en la periferia que debían abastecer de materias primas a los países de elevada industrialización.

Si la humanidad hubiera vivido en un mundo ricardiano, ese principio que es teóricamente exacto, hubiera podido ser efectivo, pero en materia económica a veces las doctrinas vienen rezagadas y ésta que tanto privó, ha quedado desvirtuada por los hechos mismos de la economía. La relación entre los precios de los productos primarios y los artículos finales de la industria, contraría, precisamente la tan divulgada teoría.

Los progresos de la técnica, más posibles en los medios industriales que en los agropecuarios, deberían haber determinado precios menores para los primeros y, sin embargo, fueron mayores, lo que significa en definitiva, que los actuantes en la producción de los artículos finales de la industria, se quedaban no sólo con el progreso de la técnica, la esfera a la cual se encontraban vinculados, sino también con el trabajo y con la riqueza de los países que, como el nuestro, producían materias primas.

Hemos roto ese concepto; y por ello afirma el radicalismo la necesidad de consolidar la industria, como sostiene también la democratización industrial con la participación de los técnicos, empleados y obreros en la distribución de las utilidades, la libertad sindical y el derecho de huelga.

En nuestro país, pues, ha habido un desarrollo paralelo de la industria nacional con el de las fuerzas sociales y sindicales, cuya facundia puede sintetizarse en aquel magnífico consuno, tan vinculado a la acción del radicalismo, que se llama la reforma universitaria, la unión de los obreros y estudiantes, ambos elementos forjadores de la grandeza nacional.

Al hablar de la organización de una democracia económica, en el punto 4º, señalamos una discrepancia fundamental a la que me he de referir cuando trate algunos aspectos de este proyecto de ley.

¿Cuáles son las razones históricas que abonan nuestro concepto? Lo he de decir rápidamente, porque es orgullo y blasón del radicalismo, recordando palabras de Hipólito Yrigoyen al hacerse responsable de la revolución de febrero de 1905, y al referirse a la seguridad de los capitales invertidos en el país: «El criterio extranjero está habituado a pasar por alto el concepto de nacionalidad soberana y organizada, a que tenemos derecho, para sólo preocuparse de la riqueza del suelo argentino y de seguridad de los capitales invertidos en préstamos a los gobiernos o empresas industriales y de comercio.»

Fustiga la inmoralidad política que no ha sabido rodear de respeto el nombre del país, fustiga a los causantes y beneficiarios de ese desastre del honor y crédito nacional, que carecen de autoridad y título para continuar invocando el prestigio argentino en el exterior.

En 1905 hacía cuatro años que terminaba de pagarse el primer empréstito contraído en 1824, que fue aquel con el que se hipotecaron las tierras de la Nación, a fin de construir —y no se construyeron— el puerto de la Capital, ciudades fronterizas, servicios de aguas corrientes en la ciudad de Buenos Aires, por 1.000.000 de libras. Para conseguir 5.000.000 de pesos fuertes se invirtieron 26.000.000, que concluyeron de ser pagados en 1901. Comienza por entonces el primer proceso de infiltración económica en el país. En 1907 se otorga la concesión a la Compañía Alemana de Electricidad, al Anglo Argentino, se sanciona la ley del puerto de Rosario, y se otorgan concesiones —que he tenido oportunidad de estudiar alguna vez— en todos los partidos limítrofes de la Capital Federal a las sociedades subsidiarias del consorcio mundial de la electricidad.

En el lapso 1933/1936 —y señalo que de nuevo acaece con algunos años de anterioridad

a la iniciación de otra guerra— se produce una nueva búsqueda de mercados, debido a la necesidad de colocar en medio tranquilo y rendidor los capitales extranjeros, se sancionan las leyes de la Corporación de Transportes, la relacionada con las concesiones eléctricas, la creación del Banco Central, del Instituto Movilizador y las juntas reguladoras. Anticipándome a las palabras que han de venir, quiero expresar un hecho macizo, grueso e irrefutable, el de que en la República, para condenar y criticar estos hechos, hubo una sola voz, la de algunos pocos hombres; siempre hay algunos pocos hombres que salvan; algunas voces surgieron de los hombres de la Unión Cívica Radical, y —a fuer de adversario leal— otras de integrantes del Partido Socialista, sin dejar de citar especialmente la ciclópea de Lisandro de la Torre. Nada, ni nadie más. Después de ello, todo fué silencio.

En la actualidad estamos sufriendo un nuevo proceso, el de la necesidad de conquistar mercados debido a la saturación de las plazas internas de los grandes países productores.

Con el proyecto de ley cuya sanción se solicita se inicia un tercer proceso de infiltración económica en la República. Descartamos equivocarnos, pero consideramos que el mundo se encuentra en un nuevo proceso de conquista de mercados y de preparación para la guerra.

Yrigoyen tuvo una política clara y definida que no pudo concretarse por la oposición del Senado. Sin embargo, los gobiernos radicales proyectaron la creación del Banco Central, produjeron el veto a la ley de sociedades mixtas de ferrocarriles, la nacionalización de los frigoríficos, y se definió la política del petróleo. También tuvo lugar el pacto D'Abernon, respecto del cual hubiera querido que estuvieran los señores ministros en esas bancas para recordarles que la política de los créditos recíprocos fué iniciada en este país por Hipólito Yrigoyen y no por este Poder Ejecutivo; la posición internacional; en suma, la defensa de la soberanía y la lucha antiimperialista.

Voy a referirme concretamente al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a aprobar las inversiones extranjeras. Aprueba si se instalarán plantas nuevas independientes o si se asociarán a las ya existentes; aprueba si los capitales se dedicarán a la industria o a la minería; aprueba si se incorporarán bajo forma de divisas o de maquinarias, equipos, herramientas y otros bienes, etcétera. Está autorizado por el artículo 12 —y no he encontrado que se dé la misma franquicia al capital de industria nacional— a eximir, total o parcialmente, del pago de los derechos de aduana a los bienes físicos que se incorporen al país; a fijar derechos aduaneros adicionales de fomento

para artículos de competencia que fabriquen los capitales extranjeros, derechos aduaneros de defensa superiores al 50 % del valor fijado para el producto en la tarifa de avalúos; a fijar cuotas de importación para artículos de competencia y hasta prohibiciones de importación; a conceder subsidios a la industria de capital extranjero, que, según informes de los señores ministros, llegan, tan sólo en lo que se refiere a los frigoríficos, a la suma de 500.000.000 de pesos anuales.

Todo este capítulo de autorizaciones ilimitadas coloca a la ley en las manos exclusivas del Poder Ejecutivo. Ya no es un simple concepto de administración, envuelve toda una idea política vinculada a nuestro concepto de organización de una democracia económica, implica la pugna que existe entre el concepto del absolutismo y el concepto democrático de la economía. No ya porque nosotros podamos no tener confianza en el Poder Ejecutivo, porque esta ley no se la votaríamos así ni a un gobierno radical; no ya porque recordemos aquella planta de aluminio que el Poder Ejecutivo compró íntegra y que no existía en Italia; no ya porque hagamos memoria de todo lo dicho sobre la bomba atómica y sobre los descubrimientos de Richter, porque preferimos olvidarlo por ser una desgracia para el país, sino porque entendemos que el control de la economía debe hacerse sobre la base de un planeamiento realizado por los órganos representativos de la voluntad popular, por estos órganos que colocan a la riqueza natural, al crédito, a la producción, a las industrias y al intercambio internacional al servicio del pueblo y no de una minoría, porque deben movilizarse los recursos, no en el limitado beneficio de los poseedores, sino en el desarrollo nacional y del bienestar social.

Porque queremos un proceso a la inversa, deseamos que primero se establezcan las necesidades del país y que incluso se fije un plan con los países vecinos para determinar las necesidades de inversión y las industrias donde puedan invertirse los capitales, para recién entonces, sobre el estudio de los distintos sectores económicos y sociales, adoptar las providencias correspondientes.

Sr. Rumbo. — Pero, entonces, para el señor diputado, ¿qué significa el segundo Plan Quinquenal?

Sr. Alende. — El Plan Quinquenal está hecho especialmente con un objeto, y sobre el particular ya he de volver y, entonces, le habré de contestar al señor diputado, porque ahora no quiero perder el hilo de mi exposición.

Con referencia a los capitales han de quedar equiparados a los nacionales, recibirán un tratamiento igual a los de las empresas argentinas similares, y a partir de los dos años

el inversor tendrá derecho a transferir al país de origen utilidades líquidas hasta el 8 % del capital registrado, esto es, de la suma de capital originario más las utilidades que sobrepasen el 8 % o que no se deseen transferir.

Ya que me he referido a aquel gravoso empréstito, quiero decir unas palabras sin compromiso sobre los empréstitos. La experiencia demuestra que en general los empréstitos han sido onerosos para la Nación y se ha identificado la política de empréstito con la traición al país. Al respecto el señor presidente de la República incluso ha prometido cortarse las manos antes de firmarlos.

Sr. Alonso. — Sigue diciéndolo.

Sr. Alende. — La deuda pública externa se ha pagado con un interés fluctuante entre las siguientes cifras: en 1928, con el 5,73 %; en plena crisis de 1930, con el 7,29 %; sólo en 1932 llegó al 8,31 %, es decir, superó recién entonces el 8 % de utilidades permitidas por este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo; en 1935, con el 5,33 %; en 1936, con el 5,54 %; en 1937, con el 4,91 %, en 1938 con el 4,60 %. Y los servicios del capital ferroviario significaban un 4 % a la par, y 3,77 % al cambio.

Sostengo que la forma de empréstito es gravosa y onerosa en la medida del producido que se le hace dar a la suma obtenida por él. Pueden comprarse las maquinarias que el gobierno quiera, y una vez pagado se termina el compromiso, sin pedir nada a nadie, porque al fin de cuentas se paga con la suma de los ahorros nacionales. A pesar de que tenemos que admitir que es un hecho desgraciado, como fué desgraciada la situación del país en 1916 cuando, en épocas en que el Estado y el mundo tenían otro sistema crediticio, se vió obligado a concertar empréstitos en el exterior.

Pero no ha de necesitar cortarse las manos el presidente de la República, porque esta política que ahora se propugna, desde el punto de vista económico da un interés superior, y a los quince o veinte años no sucede ya que quede cancelado el compromiso, sino que hay que devolver todo el capital. Lo que en realidad ocurre es que la medida de estas operaciones no la da el interés local, puesto que los países prestamistas no desean ya conceder empréstitos, y prefieren realizar este otro tipo de operaciones.

Por eso en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dije al señor ministro de Comercio Exterior que se manejaban con viejos esquemas, porque la mentalidad colonial, que se refería a la producción de las materias primas por unos países y su absorción por otros, ya no cuenta, y que en definitiva la mentalidad colonial del esquema presente y de este ciclo económico que se inicia está vinculada al interés del inversor.

Sr. Alonso. — Qué le contestó el señor ministro?

Sr. Alende. — La experiencia recogida muestra que hay un cambio de área en lo que se refiere al sentido de las inversiones de los países prestamistas. Ya no quieren invertir más en los servicios públicos porque son de un bajo rendimiento, y buscan estas inversiones directas de extraordinarios rendimientos.

Por eso señalo que incluso la nacionalización de los servicios públicos se ha hecho hasta donde convenía al país vendedor: se ha hecho con los ferrocarriles, que ya próxima la caducidad de la ley Mitre se encontraban en una situación económica ruinosa; pero no se ha hecho con el petróleo, con los frigoríficos. Se han tocado con las nacionalizaciones las esferas de capital donde había interés de vender por parte de los países prestamistas, y cuando no ha sido así, como en el caso de los servicios telefónicos, se ha podido señalar, como han tenido oportunidad de hacerlo los diputados radicales, el fracaso de una política que ha terminado hace pocos meses con el regalo, al cancelarse compromisos por varios millones de dólares a los capitales norteamericanos.

Existe también un cambio en cuanto a la nacionalidad de los capitales. El señor diputado Degreaf ha leído las cifras de las inversiones, que pueden controlarse con las remitidas en este informe por el poder Ejecutivo de la Nación, en donde se puede apreciar que Estados Unidos toma la delantera en lo que se refiere a inversiones de capitales extranjeros en la Argentina.

Ya he de señalar mi objeción formal al valor de estas cifras oficiales que para 1940 eran, por ejemplo, en lo que respecta al capital de Alemania, de 35.000.000 de pesos. Sabe el país —no recuerdo exactamente la cifra— que se expropiaron más de 500.000.000 de pesos cuando el Poder Ejecutivo declaró la guerra en el momento de agonía de Alemania.

Por este proyecto de ley las utilidades que no se transfieren se capitalizan y ganan antigüedad. A los diez años, el capital comienza a remitirse de vuelta al país de origen en cuotas del diez o veinte por ciento, a tal punto que a los quince o veinte años habrá regresado todo el capital originario.

Se dice que será nacionalizado el capital con las utilidades que excedan del 8 %. No será una nacionalización, sino una pseudo nacionalización. Pienso que es ingenuo creer que se trata de un capital nacionalizado cuando los tenedores de los títulos van a residir siempre en el exterior; cuando son los países inversores los que tienen interés en este tipo de operaciones, que pueden ser necesarias con otra estructura más garantida para la República. Así lo demuestra este documento del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el que se hace esta observación con referencia concreta a la Argentina: «Pero en cualquier caso es improbable que haya un apreciable movimiento de ca-

pitales hacia la Argentina, hasta que se asegure el envío de utilidades y el retiro del capital principal.»

Denuncia, frente a quienes han estado denostando a los argentinos del pasado e incluso han hecho severas condenaciones de entrega en el segundo Plan Quinquenal, que esta operación política es más gravosa para los intereses del pueblo argentino que muchos empréstitos votados en el pasado.

Este capital no podrá identificarse —lo señalé en la Comisión de Presupuesto y Hacienda— y con el sistema actual de las sociedades anónimas, luego de la modificación del artículo 5º de la ley de impuesto a los réditos, y de la ley sobre transmisión gratuita de bienes, pues el tributo correspondiente a las acciones no lo paga el tenedor sino la propia sociedad y no figuran dichas acciones en las sucesiones, nunca podrá saberse en manos de quién están las acciones de estos capitales extranjeros.

Celebro que estas palabras pronunciadas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hayan tenido por lo menos alguna respuesta por parte de los señores ministros. Según una noticia que publica la prensa del 3 de agosto, se tratará de actualizar las fórmulas de los balances de las sociedades anónimas y facilitar la fiscalización de esas personas jurídicas por parte de la Dirección General Impositiva y la Comisión de Valores, para lo cual se designa una comisión integrada por el subsecretario del Ministerio de Hacienda y por funcionarios de distintos ministerios.

Pero entiendo que no podrá identificarse el capital.

Incluso podrán retransmitirse utilidades por el mercado paralelo, con el agravante de que los créditos que se darán en los bancos ampliarán el capital, y ese rendimiento hoy habitual que señala el mensaje, del 16 % sobre el capital invertido, podrá ampliarse mediante el apoyo del ahorro nacional. Más todavía: según lo manifestaron los señores ministros, no se fijarán tipos de cambio en lo que se refiere al ingreso y a la remesa de los mencionados capitales extranjeros.

Esos capitales necesitan, señor presidente, seguridad y confianza en las inversiones, para que venga el capital de buena fe y no el capital que busca un alto valor especulativo.

Nosotros hacemos de este problema no un acto de agravio para nadie, sino primordial y fundamentalmente un acto de defensa del interés nacional. Y decimos que la seguridad y la confianza la dan el trato inalterable, y que no es posible, por ejemplo, que en un discurso de 1º de mayo, pronunciado en la plaza pública, se hable de los crímenes que se están preparando en las comunidades de Chicago, y aparezcan después artículos de «Descartes», de Perón, in-

formando que, gracias a Dios, Estados Unidos tiene un gran presidente.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Alende. — Voy a traer a colación el artículo 40 de la Constitución, no porque podamos creer nosotros que con él hay un mandato directo, sino para demostrar la ligereza y la irresponsabilidad con que se tratan estos temas de tanta gravedad y trascendencia para la vida económica del país. Dijo el miembro informante que «La reforma constitucional convierte en bienes de la Nación todos los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y cualquier fuente natural de energía, con excepción de los vegetales; los hace bienes públicos, que no se pueden desafectar, enajenar ni conceder a particulares para su explotación.»

Sr. Miel Asquía. — Pero ¿quién dijo que se vayan a dar a particulares...?

Sr. Gomis. — El señor diputado por Buenos Aires está haciendo un discurso político.

Sr. Alende. — Lo dijo el señor miembro informante de la Convención Nacional Constituyente; que se transferían esos bienes a la categoría de propiedad pública nacional, se establecía el monopolio del Estado para su explotación y se introducía, como consecuencia, un cambio profundo en el régimen jurídico de las minas, respecto del vigente en el Código Civil y en el Código de Minería.

Ya que he mencionado el Código de Minería, quiero recordar que hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, enviado en 1951, cuyo artículo 91 establece el derecho del Estado para declarar caducas las concesiones mineras por causa de utilidad pública, agregando a continuación que la indemnización al concesionario se establecerá en la forma prescrita por la Constitución Nacional para la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos. En ese mismo proyecto se dispone que quedan excluidas de sus normas los yacimientos de petróleo —esto es, justamente lo que más necesita cuidar el país—, así como los de carbón, gas y demás sustancias minerales productoras de energía.

Ahora contesto al señor diputado Rumbo, señalando las contradicciones que existen entre lo que se dijo cuando se reformó la Constitución, las disposiciones del proyecto de Código de Minería y las preferencias del segundo Plan Quinquenal, porque los capitales extranjeros que se invierten en ese orden de preferencias —siderurgia, metalurgia, etcétera— estarán sometidos, según los informantes de la Convención, al artículo 40 de la Constitución Nacional.

Estas son las rectificaciones de la política del peronismo en materia económica. Tenemos muchos recortes, señor presidente; aseguro que sería un ensañamiento leer y actualizar todo lo que se dijo, en materia de política económica, por parte del Poder Ejecutivo. Baste recordar que nuestro ministro de Hacienda fué a dar conferencias lacrimosas al capital yanqui, asegurándole que no se aplicaría el artículo 40 de la Constitución Nacional y que se darían a los capitales extranjeros las garantías que se proporciona al capital nacional.

¿Cómo va a funcionar, señor presidente, esta ley? Lo único efectivo será la remesa de utilidades; y en este sentido creemos que el Poder Ejecutivo comete un error al pensar que al capital inversor le interesan solamente las remesas de utilidades.

El exceso del 8 % de utilidades que se nacionalizará —que no podrá ser controlado por el país porque el propio Congreso ha votado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que imposibilita su control— ha de infiltrarse en la economía, ha de ser inversiones en otras industrias, ha de tomar la tierra y aumentar su valor especulativo. Puede suceder, incluso, señor presidente, en lo que se refiere a los bloques imperialistas en pugna, que ese capital esté buscando y organizando aquí, en nuestra Argentina, sus propios equipos de conducción. Tenemos la experiencia de lo que ha significado para la deformación geoeconómica del país lo que recordábamos los otros días respecto a la orientación convergente de los ferrocarriles nacionales; la corrupción provocada y demostrada en documentos que hemos pedido que se traigan a esta Cámara y que ha ocultado el peronismo...

Sr. Otero. — El peronismo no ha ocultado nada.

Sr. Alende. — ...en lo que respecta a la acción política de infiltración de la CADE, cuyas pruebas venimos pidiendo desde el año 1946 y no sé por qué razones no llegan a esta Cámara; tenemos esa amarga, triste y dolorosa experiencia de lo que significa el poder de infiltración del capital extranjero.

Nosotros, que hemos coincidido con la política del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a los planes hidroeléctricos y de la industria pesada; que hemos disentido permanentemente en materia de política del petróleo; que hemos coincidido en la necesidad de que el país tuviera sus recursos para la administración, nosotros decimos que en el peso de nuestro voto está la valoración de esas amplias concesiones al Poder Ejecutivo; que para lograr una legislación real y efectiva es necesario que tengamos un régimen de seguridad jurídica, Constitución y leyes que, aunque no hayamos votado, las hemos aceptado siempre, pero que deben cumplirse; que no aparezca la aberración de

un estado de guerra interno que si da seguridad a los capitales extranjeros siembra la discordia, la zozobra, el rencor y el desencuentro de los argentinos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos)

Sr. Miel Asquía. — Ustedes no quieren ponerle fin.

Sr. Alende. — El 18 de julio próximo pasado el radicalismo de la provincia de Buenos Aires dió su palabra con respecto a este proyecto de ley.

Sr. Gago. — ¿Cuántos radicalismos hay?

Sr. Alende. — Hay uno solo, honroso y glorioso.

Sr. Miel Asquía. — ¡No parece!

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Alende. — Como he dicho reiteradamente, desde el año 30 el radicalismo está en el llano, cada vez más vigorizado por la adversidad; y ustedes no tendrán peronismo al día siguiente de que desaparezca Perón.

Sr. Astorgano. — Está equivocado.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Alende. — El radicalismo considera que este proyecto de ley es un acto regresivo destinado a clausurar, quizás por largo tiempo, toda posibilidad de acceso a la emancipación económica. Con ello refirma su voluntad de combatir por una transformación económica y social de Argentina que cree un nuevo estilo de vida en nuestra patria, mediante la realización de una reforma agraria inmediata y profunda —que este gobierno no hará porque está aliado a la oligarquía, al latifundio y a los grandes terratenientes del país—...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Alende. — ...mediante la consolidación de la industria, la autarquía energética, el establecimiento de una industria pesada que den estilo de vida, sujeto a la exclusiva rectoría de la libertad individual, de la democracia política y social, de la emancipación económica y de la plena autenticidad cultural que nos convierta en magníficos e inobjectables propulsores de la unidad americana.

Frente al falseamiento de la democracia por el fraude, estuvimos solos. Ahora tenemos el fraude ignominioso de la conciencia nacional de trescientos sesenta y cuatro días al año, con el monopolio de la información y la destrucción de toda libertad.

Sr. Díaz de Vivar. — ¿Y cuando se aliaron con Braden?...

Sr. Alende. — ¡Qué Braden, si ahora tenemos el connubio con los intereses del capitalismo norteamericano!

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Alende. — Se quiere hacer cuestión de nombres nada menos que en este sutil asunto de los vínculos económicos que, insensiblemente, sin ser percibidos por los pueblos, manejan y subyugan a las naciones. Es ridículo hacer una cuestión de nombres de la política norteamericana, cuando precisamente el partido del actual presidente de Estados Unidos, con Harding, Coolidge y Hoover, representó, como ningún otro en su hora, la plutocracia y el imperialismo norteamericanos, frente a los cuales estuvo cuadrado Hipólito Yrigoyen.

Algunos hombres amamos de verdad a la América nuestra.

Amamos la América morena que, al Sur del río Grande, vió verter la simiente de los bravos de Castilla en el ánfora prolífica de la indomitable raza americana y luego llegar, con la sola exigencia de una buena voluntad, a los parias, a los desesperados, a los naufragos de todas las latitudes de la tierra.

La reivindicación de los pueblos oprimidos por la alianza infernal de aprovechados dictadores y de los intereses del capital privilegiado integra el programa de lucha de toda una generación. Amamos y admiramos al pueblo de Lincoln y de Wilson, como a todos los pueblos de la tierra, por saberlo imbuído de estos mismos ideales y principios, pero sentimos, maguer el enojoso y apasionante desencuentro de los argentinos, la enorme responsabilidad de nuestra patria en el desarrollo del drama americano.

Por eso queremos conservar dignidad y estatura, la reciedumbre interior que da una democracia bien vivida y una economía bien saneada, para ser, así, eficientes ejecutores de la grande tarea argentina y americana y poder mirar a cada una de las naciones de la tierra, a la de más poderío y a la menos fuerte, de igual a igual, sin arrogancias, pero también sin sumisiones.

Como ni este momento argentino —por su falta de seguridad jurídica y por su inestabilidad institucional—, ni la estructura de esta ley conforman esas elementales exigencias, decimos, señor presidente, que junto con estas críticas de superior inspiración va la irrevocable decisión de los radicales de votar este proyecto de ley por la negativa. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Gago. — Habló el radicalismo de Buenos Aires.

Sr. Nudelman. — El único radicalismo, el radicalismo de toda la República.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Benítez). — Está en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis: cuando termine su exposición el señor diputado por San Luis, la Presidencia concederá la palabra al señor diputado por la Capital.

Sr. Fernández (H. S.). — Señor presidente: indudablemente el proyecto a consideración de la Honorable Cámara reviste una gran importancia y es de singular trascendencia, y no escapa al criterio de los señores diputados la palpitante actualidad que adquiere precisamente una solución de esta naturaleza. Pero verdaderamente no llego a comprender la posición del señor diputado por la minoría que acaba de exponer, pues ha reconocido la importancia de esta solución que busca el gobierno, pero en realidad no se ha referido al proyecto porque sólo tangencialmente ha querido insinuar la conveniencia o la no conveniencia de traer capitales al país. Su discurso ha ido dirigido a hacer una crítica a la política económica general del gobierno, pero no se ha referido a este estatuto que debe regir de hoy en más a los capitales que vengan al país. (*Aplausos.*)

Parecería que el señor diputado hace largo tiempo que ha venido haciendo una síntesis de las cosas que debía criticar al gobierno del general Perón y también a la política del Partido Peronista que gobierna, para venir a traerlas hoy tangencialmente, cual si fuera una satisfacción personal que no hubiera podido tener hasta este instante.

Sr. Alende. — Ningún argentino puede satisfacerse con la desgracia del país, señor diputado.

Sr. Fernández (H. S.). — No le discuto que como argentino pueda decir todas las cosas...

Sr. Alende. — Cosas responsables y corroboradas por los hechos...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Fernández (H. S.). — Alguna vez he dicho que cuando se ocupa una banca del Congreso, desempeñando un cargo de responsabi-

lidad discernido por el pueblo, no puede venir con desahogos personales.

Sr. Alende. — Nunca he tenido desahogos personales; siempre pienso en el bien del país.

Sr. Fernández (H. S.). — El señor diputado debe escucharme, como yo lo he hecho.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Ruego al señor diputado por Buenos Aires que permita al señor diputado por San Luis expedirse con la misma tranquilidad de que disfrutó el señor diputado por Buenos Aires cuando hacía uso de la palabra.

Sr. Fernández (H. S.). — Decía que cuando se tiene la responsabilidad de ocupar una banca en el Congreso, no se puede venir por entusiasmo y desahogo —sin referirme al señor diputado por Buenos Aires— a expresar ciertas cosas que resultan inadmisibles y que pueden resultar perjudiciales para el país. (*Aplausos.*)

Debemos ocuparnos del proyecto en discusión y no desviar las cosas, como con frecuencia se hace, hacia el terreno político.

Alguna vez dije que espero hagamos un debate político para que nos digamos todo lo que tengamos que decirnos.

Sr. Nudelman. — Hace dos años que lo esperamos.

Sr. Fernández (H. S.). — Ante una cuestión seria, perfectamente establecida, que viene con orientación determinada, no es posible por vía tangencial tocar todos los puntos políticos que se quiera.

He de seguir los lineamientos generales del proyecto, porque la exposición del señor diputado por Buenos Aires más que una crítica al proyecto, es un planteo político que no corresponde que lo conteste, ni que lo sigamos tratando ahora.

Antes de terminar este comentario que me sugiere el discurso del señor diputado, quiero significar que lo que no pueden entender los señores diputados ni quieren aceptar, es que el país —desde la llegada del general Perón al gobierno, en su orientación política, en su orientación social y económica— vive una profunda transformación y que el pueblo de la República hoy está en el gobierno con los obreros y con todos los hombres que genuinamente los representan. (*Aplausos.*)

Es inaceptable que este proyecto, que se refiere a los capitales que vendrán o no vendrán, nos sirva para referirnos a todos los errores del pasado, de los que ni unos ni otros somos responsables.

Aquí se ha hecho la historia del capital extranjero desde la época en que el país nació como independiente y en los primeros pasos que

se dieron en materia de comercio, industrialización y bancos. Considero que debemos pensar en el asunto que debatimos, ya que el Poder Ejecutivo quiere que sancionemos un estatuto que rija a los capitales que ingresen al país.

Reconozco que los capitales extranjeros han prestado grandes beneficios; pero también debemos manifestar que ellos no sólo han obtenido la legítima retribución, sino que la han excedido en forma extraordinaria.

Nuestros gobiernos los han dejado acrecentarse y salir del territorio nacional en una forma que no fué superada en otros países.

Después de la llegada del peronismo no se lesionó al capital extranjero, ya que pudo salir en la medida que lo posibilitaba la tenencia de divisas. Además en la Constitución de 1949 se estableció que todos los servicios públicos debían ser nacionalizados. Aparte de ello, por boca del excelentísimo señor presidente de la Nación, hemos concretado la teoría de que todas las empresas que sea necesario nacionalizar serían adquiridas, como se hizo con los servicios ferroviarios y telefónicos. Solamente en los casos en que no acepten los precios se podrá llegar a la expropiación.

Quisiera recordar la triste suerte de los capitales europeos y norteamericanos incorporados a las economías de otros países del mundo, especialmente en los últimos tiempos. Tanto los capitales ingleses, franceses como norteamericanos, no han podido resarcir las inversiones realizadas. En muchos de ellos ni siquiera pudieron cobrar los intereses. Orgullosamente puedo manifestar que todos los capitales extranjeros incorporados a nuestra economía percibieron los correspondientes intereses, y retiraron capitales.

El Poder Ejecutivo ha hecho un análisis exhaustivo, refiriéndose a todos los aspectos de esta cuestión que debate la Honorable Cámara. En el mensaje se encuentran los verdaderos fundamentos de esta ley, que no me he de permitir repetir porque todos los señores diputados los conocen.

Quiero decir, entonces, frente a esta situación, que este proyecto no es una improvisación, que el mismo establece cuál ha de ser el régimen para los capitales extranjeros que puedan ingresar al país. Es una cuestión perfectamente meditada. Alguien ha dicho que se había improvisado y yo puedo decir que no hay tal improvisación, porque en el mensaje del año 1949, el señor presidente de la República ya esbozada —como ya se había hecho en la Constitución que se dictara ese año— cuál era el verdadero concepto y a qué podrían dedicarse los capitales que pudieran ingresar al país.

De acuerdo con los términos de los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución, los capitales extranjeros no pueden ir a explotar los servicios públicos nacionales porque estos están re-

servados expresamente al capital nacional y al gobierno de la Nación, quien los ha de explotar.

El artículo 38 dice que: «El capital estará al servicio de la economía nacional y tendrá como principal objeto el bienestar social», es decir que el interés del pueblo, el interés de la población, dentro del aspecto social que ha creado el peronismo, es lo que debe respetarse. En una palabra, el capital debe estar al servicio de esta economía y no puede explotar otras actividades que las que están expresamente establecidas en la Constitución y que el Poder Ejecutivo, en el mensaje a que me he referido, analizaba.

La parte final del artículo 40 establece los lineamientos generales del artículo 1º de este proyecto; estatuye que los capitales extranjeros podrán incorporarse al país para invertirse en la industria y en la minería, instalando plantas nuevas o asociándose a las existentes, vale decir, que no pueden ser aceptados para otras actividades y sólo tendrán que dedicarse pura y exclusivamente a lo que determina la ley.

Creo que dentro de este aspecto debemos hacer un distingo de tres situaciones especiales: capitales que vienen traídos por los particulares; capitales extranjeros que vienen traídos por empresarios ya establecidos en el país y que solicitan su registro en este reglamento que vamos a dictar; y, por último, capitales extranjeros que puede el gobierno, en un momento dado, contratar y traer al país.

Parecería que los señores diputados de la oposición desearan que nosotros hoy estuviéramos en la situación de ir a solicitar un empréstito para que el gobierno lo invierta directamente.

En el Plan Quinquenal está establecido que todos los trabajos que deban realizarse en el país serán hechos a base de la economía o del ahorro.

En declaraciones periodísticas de estos últimos tiempos se ha aclarado a esos capitales que si algunos quieren venir a colaborar en las distintas obras programadas en el segundo Plan Quinquenal, podrán ser tomados en consideración por el gobierno pero no ha de ser en forma de empréstitos sino que con ellos podrán constituirse sociedades para presentarse a las licitaciones a que pueda llamar el Poder Ejecutivo para la realización de las obras previstas; o podrán venir como capitales que se incorporen a sociedades que podrán dedicarse a la concreción de esas obras pero por cuenta y orden del gobierno de la Nación; o podrán venir porque aspiran a incorporarse a nuestra economía, en cuyo caso, lo harán como capitales argentinos. Esa ha de ser una de las formas más reales que hemos de apreciar en estos tiempos, y puedo adelantar que por el momento el gobierno de la Nación no ha de contratar ningún empréstito y entonces los particulares de las

distintas naciones del orbe que tengan un exceso de capital podrán invertirlos aquí siguiendo el régimen que se establece expresamente en este proyecto.

He dicho que no improvisamos absolutamente nada en esta cuestión, y que el proyecto que tenemos en discusión es constitucional porque se ajusta a lo preceptuado por los artículos que ya he citado. Más aún: los países inversores se encuentran preocupados en estos momentos por tener dónde colocar sus capitales. En la vieja Europa, apremiados por el comunismo, sienten el vehemente deseo de salir, y justamente nuestro país es uno de los que les ofrecen mayores garantías. También por el amago de una nueva guerra, pero más que todo por las proyecciones que pueda tener el comunismo en Europa, capitalistas de Francia, Alemania, e Italia, particularmente, desean buscar nuevos horizontes, y uno de los más promisorios, repito, es nuestro país, por su estabilidad política, por su tranquilidad social, por el elemento humano que puede ofrecerse a esos capitales.

Para que nadie se llame a engaño, en este proyecto se ha incluido una cláusula especial por la que la maquinaria que se traiga al país debe ser nueva o estar en perfectas condiciones de uso y de rendimiento. Esto se debe a que tenemos conocimiento de que muchos de los dineros del plan Marshall, que han servido para la renovación de industrias en Europa, significaron el retiro de maquinaria anticuada, y probablemente quieran traerla a estos países. De ahí esta previsión absolutamente clara que el Poder Ejecutivo ha incorporado al proyecto.

No sólo aspiramos a que vengan capitales en sí. Entendemos que existe una enorme masa de bienes que significan valor, cuyo ingreso al país se desea; y en ello también el proyecto es especialmente previsor, al decir que podrán venir capitales, pero también plantas, máquinas y herramientas. Implícitamente se encuentra establecido que también podrán incorporarse junto con esos capitales valores humanos que serán reconocidos y respetados.

Así aspiramos a que los pequeños capitalistas o pequeños ahorristas europeos, norteamericanos o de otras partes del mundo prefieran el camino de incorporarse a esta economía argentina, que les resulta absolutamente beneficiosa y les ofrece toda clase de garantías, como expresé hace un momento.

Hasta el presente no existía una ley que rigiera el movimiento de estos capitales extranjeros, y todo se ha venido gobernando con disposiciones del Banco Central. Con esta ley queremos terminar con ese régimen, para establecer un nuevo lineamiento general a los capitales que ingresen al país. Repito que los capitales extranjeros que están actualmente en el país y tengan necesidad de remitir sus dividendos al exterior deberán seguir rigiéndose por

las disposiciones del Banco Central y no por las de la ley que consideramos.

También quiero destacar expresamente, porque es una crítica que se ha generalizado en estos últimos tiempos y una de las observaciones más serias que se hacen al proyecto, que no es exacto que al girarse los intereses que exceden del 8 % después de los dos años, serían alcanzados por algunas disposiciones impositivas, pues el 30 % de recargo establecido por ausentismo en la ley de impuesto a los réditos solamente se refiere a las rentas de la primera categoría.

En cuanto a la forma en que los capitales podrán, transcurridos diez años, salir del país, está expresamente establecida en un término que es el que determinan en general las leyes de Brasil, México y Egipto; es decir, en un término que varía entre los diez y veinte años.

Creemos prudente establecer cuál es el interés que los capitales extranjeros pueden ganar, que se ha fijado en el 8 % a que me he referido anteriormente, y también cuál es la cantidad que podrían empezar a retirar pasados los diez años. Se ha fijado expresamente cuál es el interés porque la experiencia demuestra que, una vez organizadas, estas empresas no sólo dan un interés del 8 %, sino muy superior, y el drenaje de esa ganancia hacia el exterior iría en contra de los intereses de nuestro pueblo, para quien la mayoría de las veces el capital resulta despiadado.

Por eso no se podrá girar más del 8 %, y lo que exceda ese porcentaje debe quedar como capital nacional. Esa es una sana previsión y que está absolutamente de acuerdo con nuestra política social.

Con respecto al tiempo en que esos capitales pueden retirarse, hemos creído prudente establecer que una vez transcurridos diez años podrán retirarse en cuotas del 10 al 20 %. Se busca con esta disposición que los capitales no puedan retirarse rápidamente. Se tiene la experiencia de que capitales que se incorporan a una economía producen una especie de afiebramiento de los capitales, y cuando han conseguido ciertos y determinados precios o combatir determinadas situaciones, se retiran de inmediato. Quien sufre entonces las consecuencias de esas maniobras es precisamente el país.

Como garantía a ese capital y sus intereses, está expresamente establecido en la ley que si el inversionista no desea retirar el 8 % de las utilidades después de los dos años, podrá acumularlo al capital. Esos intereses ganan entonces la antigüedad del capital originario.

Todo capital extranjero que en el futuro, por el régimen de esta ley, deba incorporarse al país, tendrá que ser inscripto en un registro que se organizará. Esta disposición introduce una novedad con respecto a otras leyes más o menos similares que existen en el continente, pero nuestra organización política y nuestro ré-

gimen bancario exigen esa inscripción. De esa forma sabremos expresamente cuáles son los capitales que han ingresado por este régimen, pues ahí radica precisamente la responsabilidad que el gobierno tendrá en el futuro, cuando con divisas ganadas con esos capitales se vea obligado a girar al extranjero el 8 % de las utilidades logradas y los porcentajes de capital que se reintegre.

En algunos comentarios periodísticos y en centros directamente vinculados a las actividades económicas se ha dicho reiteradamente que una de las cosas que más deben cuidarse es la seriedad y la confianza con que debemos proceder en el futuro. A tal fin tienden estas disposiciones de la ley.

El gobierno no tiene ningún interés en atraer a los capitales con engaño, para, llegado el momento, no entregarles las divisas necesarias para girar el 8 % de utilidad y los porcentajes previstos en concepto de capital. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Por ello es que debe establecerse claramente cuáles son esos capitales, con cuáles deberán cumplirse esos compromisos. Si así no se hiciera, pasaría lo que en otras muchas oportunidades: algunos gobiernos que contrataron empréstitos no pudieron pagarlos en el momento oportuno.

La rectitud de esta ley va tan lejos que tampoco se establece cuál es el tipo de cambio con que se pagará, porque en este momento el gobierno no puede hacer previsiones sobre lo que deberá cumplir dentro de diez o veinte años.

Más aun: el gobierno puede establecer, cuando estos capitales entren a inscribirse en el registro especial, cuál será el tipo de divisas en que deberá efectuarse la reintegración de los mismos; podrá disponer que sea en principio dentro de la misma moneda o en divisas de la misma naturaleza de la moneda que se ha traído al país, o podrá convenir con los inversores en qué moneda podrá efectuarse la salida de los capitales.

No obstante la forma más o menos desordenada en que tuve que intervenir en este debate, creo que he contribuido a ilustrar sobre los lineamientos generales de la ley, y expreso a los señores diputados que pueden votarla con la más absoluta tranquilidad porque ha sido perfectamente estudiada y porque viene a traer una solución que en estos momentos es necesaria.

Y, con el propósito de levantar un cargo formulado por los señores diputados de la oposición, que dicen que esta ley de radicación de capitales es una forma disimulada de contratar empréstitos, expresamente digo que no hay tal.

La ley da la más absoluta libertad para que los capitales privados vengan a trabajar a nuestro ámbito nacional, para que se realice una vinculación de particulares a particulares, a fin

de que puedan traer esos capitales y el gobierno lo único que hará en el futuro será ser un celoso vigilante para evitar que esos capitales —como la experiencia nos enseña respecto del pasado— puedan abusar de nuestro país, de su poderío, o que vayan contra nuestro régimen rentístico o nuestro régimen de previsión social y, sobre todo, señores diputados, para evitar que puedan ir contra el pueblo de la Nación, que, como lo quiere el general Perón, es el primer interesado y el que primero debe servirse de esos capitales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Con violencia espiritual planteo un asunto que me concierne como diputado. Considero que, tanto por lo que al diputado significa, como por la representación que ejerce y por el cuerpo mismo al que se debe respeto y al que hay que integrar con todos los calibres de una conducta intachable, planteo una cuestión de privilegio que no he provocado por ningún concepto y en momento alguno.

Durante la exposición anterior, mientras hablaba nuestro colega el diputado Alende, se vertieron dos expresiones que fueron oídas perfectamente por colegas de mi sector, por muchos colegas del sector peronista, y —estoy seguro— por buena parte de la barra. Es posible que el señor presidente no las haya escuchado totalmente, pero quiero que esas dos expresiones queden bien aclaradas y levantadas en este recinto. En caso contrario, si no hay aclaración o imputación, me reservo el derecho de pedir que pase a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales la situación de los diputados que las hayan formulado.

Una voz que no puedo precisar a quién pertenece me aludió diciendo: respecto de la CHADE que hable el doctor Ravignani. En cuanto a esa alusión, me remito a las palabras que pronuncié en 1946 al incorporarme en la misma época que el señor presidente recordará, a la Honorable Cámara. Dije entonces que nada he tenido que ver con esa empresa, y que en las investigaciones practicadas y agotadas —tanto por la comisión de la Cámara como por la Comisión Especial Investigadora presidida por el señor coronel Rodríguez Conde, cuyo informe tiene en su poder el general Perón—, ha quedado perfectamente aclarado que no he tenido absolutamente ninguna intervención en asuntos de la CADE. Consta también en el Diario de Sesiones que reiteradas veces he formulado pedidos, votados nominalmente, para que el informe de la Comisión Especial Investigadora fuera enviado a la Honorable Cámara para su conocimiento.

No puedo individualizar al diputado que formuló la expresión citada, pero, en cambio, pue-

do mencionar al señor diputado Otero quien, dándose vuelta y dirigiéndose a mi persona, dijo que yo era abogado de empresas extranjeras, en contra de trabajadores. Afirmo que yo no he sido abogado de ninguna empresa extranjera. En realidad, toda mi vida he atendido mi subsistencia con ingresos del ejercicio de la docencia y una pequeña ayuda de costas proveniente del ejercicio de la profesión de abogado. He vivido honradamente de la docencia; y puedo probar, en cualquier momento, la procedencia de mi patrimonio, que se ha reducido a mantener a mi modesta familia y a formar un hogar en nuestro país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

En consecuencia toda imputación en el sentido de que yo haya defendido intereses extranjeros en la República es total y absolutamente falsa. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Desde el estrado de la Presidencia no se han oído las expresiones a que alude el señor diputado por la Capital, y en la versión taquigráfica no constan.

Acaso vertidas en momentos de agitación hayan llegado a algunos señores diputados deformadas por la estridencia de la campana, y no tienen estado parlamentario.

Si la Presidencia hubiera llegado a oír alguna expresión que pudiera afectar a un diputado, habría exigido, *motu proprio*, la correspondiente aclaración.

Sr. Ravignani. — Desearía que el señor diputado Otero manifieste de qué empresas extranjeras he sido abogado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Otero. — Señor presidente: no me referiré al fondo del asunto de la CHADE, oportunamente investigado por la Honorable Cámara. Es público y notorio cuanto consideró el viejo Concejo Deliberante y la Honorable Cámara de Diputados con respecto a la negación de un partido a considerar y tratar el enriquecimiento ilegítimo de algunos ciudadanos que eran militantes del Partido Radical y de otros partidos. Me refiero al caso de la CHADE. Este asunto lo trataremos en alguna oportunidad.

Sr. Alende. — Con mucho gusto. Deseamos que sea pronto, y que la discusión sea amplia.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia ruega al señor diputado por Buenos Aires que, frente a una cuestión eminentemente personal, permita hacer su exposición al señor diputado por la Capital.

Sr. Otero. — No hago referencias singulares; hablo en plural y con respecto a los partidos, defendiendo al partido de movimiento nacional en el que milito. Sostengo que algunos abogados pertenecientes al Partido Radical han estado al servicio de la CHADE, y que otros abogados que militan en el mismo Partido Radical han

estado siempre al servicio de los patrones y en contra de los empleados amparados por la ley 11.729. Esto lo he sostenido en alguna ocasión al contestar, no al señor diputado Ravignani, sino en general a la bancada radical en los «mano a mano» y *tête à tête* que tenemos aquí. Yo hago notar que los señores diputados de la minoría, no obstante faltar muchas veces al respeto a la mayoría, exigen que se los respete; ellos también deben saber comportarse y no cometer excesos en su lenguaje, para evitar así el planteamiento de cuestiones de privilegio y de cuestiones personales. En la defensa de los asuntos públicos nosotros no queremos llegar al terreno personal, porque estamos cumpliendo, los peronistas, una alta función patriótica.

Repito, entonces, a la bancada de la oposición que el cargo que he hecho se refiere a los abogados que actuaron en los dos casos que he mencionado, y no he planteado cuestión personal a ninguno de los señores diputados. Si en alguna oportunidad me viese obligado a plantearla, haré la cuestión fuera del recinto. (*Aplausos.*)

Sr. Perette. — Lo desafiamos a tratar de inmediato el pedido de investigación del asunto de la CHADE y de todos los negociados públicos.

Sr. Presidente (Benítez). — No es ése asunto que esté en discusión, ni es éste el momento oportuno para tratarlo.

La Presidencia da, pues, por terminada la incidencia.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — En las sesiones extraordinarias del año pasado, esta Honorable Cámara dió al Poder Ejecutivo un inusitado instrumento de gobierno: la ley para ejecutar el segundo Plan Quinquenal. Dentro de ese plan, que parece no olvidar ninguna de las cuestiones que puedan tener atinencia con la cosa pública, se hace una enunciación pretenciosa de las realizaciones a que asistirá el país en el decurso de los próximos cinco años. En su oportunidad hicimos nuestra crítica y no volveremos sobre ese tema.

Al plantearse este problema de la radicación de los capitales extranjeros y concurrir los señores ministros a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los primeros puntos que se dilucidaron fué si la sanción de este proyecto se vincula con las realizaciones del segundo Plan Quinquenal. Las respuestas de los señores ministros fueron categóricas en el sentido de que para cumplir el segundo Plan Quinquenal no se necesitan más que los recursos del ahorro nacional y que este proyecto de inversión de capitales extranjeros es un proyecto de fomento industrial, un *plus* que se agrega a las realizaciones que se piensan cumplir con el ahorro nacional. Reduciendo el proyecto a este límite mo-

desto, me permitiré establecer como premisa que es lastimoso que el Poder Ejecutivo lo haya sometido a la consideración del Congreso, porque es la manifestación de que el gobierno da marcha atrás en la enunciación máxima de su doctrina relativa a la independencia económica.

Sr. Camus. — No es exacto.

Sr. Fassi. — Ya sé que no faltarán distinguos entre la capitalización del país mediante inversiones extranjeras en el pasado y esta nueva capitalización que se proyecta; que se encontrarán salvedades en las expresiones del pensamiento presidencial o del oficialismo para considerar que la nueva vía que se sigue ahora para obtener el concurso de los capitales extranjeros nada tiene que ver con esa prédica que han agitado en todos los ámbitos del país, sobre el colonialismo, en que nos involucraban a todos los hombres que hemos gobernado el pasado argentino sin distinción de tiempo ni de partido.

Yo no soy de los que creen que la soberanía pueda ser escindida. La soberanía es una y la alcanzamos plena el 9 de julio de 1816. Por lo tanto, siempre he colocado en sus justos límites toda esta prédica sobre el colonialismo y la independencia económica.

Pero los hombres que tenemos función de gobierno no podemos olvidar que el pueblo no entra en sutilezas ni distinguos, y aun en el error este pensamiento podía tener una gran fuerza popular de impulso hacia el futuro, de progreso, de superación de obstáculos para hacer una grande Argentina.

Y ahora, a pocos años de sancionada la Constitución de 1949, la República Argentina se presenta en los mercados internacionales brindando una ley para que vengan a ayudarla los capitales extranjeros.

No es posible en el breve curso de mi exposición echar una ojeada retrospectiva a la función que el capital extranjero ha desempeñado en nuestro medio, pero sí es necesario hurgar en el pasado para encontrar una luz orientadora frente al problema que estamos considerando.

Estos no son problemas que puedan resolverse con un criterio puramente doctrinario ni acudiendo a la teoría económica, porque la teoría económica, como todas las teorías sociales, está sujeta a circunstancias de hecho, y, en consecuencia es necesario penetrar en el hecho argentino para comprender el problema.

Cuando el conquistador puso su planta en esta parte del continente, lo encontró poblado de tribus salvajes, que no habían llegado a una etapa de capitalización que les permitiera ser poseedoras de riquezas. Fué el colonizador el que trajo, juntamente con el aporte humano, los primeros capitales, y fueron los desastres iniciales de la colonia los que pusieron en libertad a aquellos animales domésticos que introdujeron los conquistadores y que se multi-

plicaron en nuestras pampas, convirtiéndose en los primeros recursos que tuvo el país para elaborar su economía. Vale decir que, carentes del oro y de la plata, fué la capitalización de esos primeros ganados vacunos y caballares lo que sirvió para hacer después la Argentina económica.

No me voy a detener en las horas dolorosas de la patria, para marchar rápidamente hacia el momento en que, dándose organización definitiva, debió proceder a la tarea de civilizar, de poblar, de capitalizar y penetrar en las vías del progreso. Es entonces cuando se dicta la Constitución de 1853 y 1860, que con un texto idéntico a la Constitución de 1949 establece, como uno de los medios de promover el progreso, la introducción de capital extranjero, aunque para ello fuera necesaria la sanción de leyes de estímulo.

Los capitales extranjeros no se negaron al requerimiento, y nuestro país, en medio de todas sus vicisitudes económicas, se desarrolló y progresó, no en la medida de nuestras aspiraciones —que lo quisiéramos mucho más avanzado en los estadios del progreso—, pero sí de una manera que los argentinos podemos ostentar con orgullo y que nos da las bases para hacer la gran Argentina del futuro.

Cuando Argentina estaba económicamente hecha, antes del peronismo, surgieron las primeras voces que pretendían ser de una generación que en lugar de laborar para el futuro se entretenía enjuiciando a los hombres del pasado. Es entonces cuando se forma esa mentalidad, siempre vinculada a problemas foráneos, siempre vinculada a ideologías extrañas, que no cree encontrar en el pasado argentino otra cosa que oprobio y vergüenza, como si pudiera haber estirpe que mire sonriendo y esperanzada hacia el futuro no teniendo más que degradación y degeneración en el pasado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

He tenido ocasión de expresar mi pensamiento frente a quienes lanzaron las primeras consignas de entreguismo y de enunciarles cuál es el pasado argentino en esta materia, cuando se recibieron los capitales extranjeros. Entonces se les brindó la seguridad que no encontraron en ninguna parte del mundo. Se les pagó bien, pero se defendió la soberanía de modo como no se la defendió mejor en ninguno de los países de la tierra.

Era el año 1876, cuando el gobierno de Gran Bretaña planteó una primera reclamación relativa al tratamiento que había merecido un banco de capital inglés en una provincia argentina. Entonces se enuncia la doctrina de Bernardo de Irigoyen, en cuya virtud se establece que las personas jurídicas no tienen nacionalidad y que, en consecuencia, ningún país inversor en Argentina podrá hacer reclamación diplomá-

tica por el tratamiento que esas personas jurídicas, sin nacionalidad, tengan en el ámbito de la patria.

Es en el año 1902 cuando se agita el problema de los derechos que tienen los países colonizadores para reclamar de los países nuevos por los perjuicios que hayan sufrido los extranjeros residentes en su seno, en los casos de conmoción o motín. Y es en un congreso americano la palabra de Antonio Bermejo la que marca la pauta estableciendo que ninguna soberanía puede ser allanada por la circunstancia de que algún extranjero haya sido perjudicado por esos hechos, que eran corrientes en las horas turbulentas en que se formaron las democracias de Latinoamérica.

En 1902, frente al incumplimiento de compromisos por el gobierno de Venezuela, se realizó la acción conjunta de Alemania, Gran Bretaña e Italia contra aquella soberanía. En nuestros viejos tiempos, que algunos llaman de colonialismo, frente a la agresión contra el país hermano, se agitaron las calles de Buenos Aires protestando nuestro pueblo contra ese atentado a su soberanía. Entonces surge la nota del 19 de diciembre de 1902, suscrita por aquel gran ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis María Drago, cuya doctrina durará eterna, como el nombre de Argentina, al establecer el principio de la no intervención en una soberanía americana para obtener el pago compulsivo de la deuda pública y externa.

Esa es la línea que siempre siguió la República Argentina, con la autoridad que le daba su condición de buen pagador. La circunstancia de que no la invocaba para no cumplir sus compromisos fortalecía su posición, dado que la invocaba para asegurar el destino de Latinoamérica, que tropezaba con dificultades de desarrollo que no siempre permitían cumplir sus compromisos, pero que los cumpliría a no dudar, porque tal era su destino histórico.

En 1940 sostuve que en los pueblos de contextura económica similar a la nuestra, llega un momento en que se supera la etapa de país deudor, para convertirse en acreedor. Recordaba el ejemplo de Estados Unidos —ya que tiene una gran similitud con Argentina—, que recibió y premió generosamente a los capitales extranjeros. No se consideró colonia cuando debía sumas ingentes a la madre patria inglesa, y se amamantó del zumo de esa economía para crecer como los cachorros y enfrentar al viejo león inglés con rugidos más fuertes, desde la playa atlántica de América. A Estados Unidos le llegó su hora en el año 1914, con motivo de la primera guerra mundial, en que pudo pagar todas sus deudas. Desde entonces, se transformó en país acreedor. Era presidente un gran demócrata, Wilson, a quien la suerte le dió el honor de presidir los destinos de su tierra cuando económicamente se emancipaba, en

el sentido de no ser deudora sino acreedora, y no se le ocurrió por un solo momento emular a Washington, ni llamarse libertador de los Estados Unidos de América.

A nosotros nos llegó la hora algo más tarde, con motivo de la segunda guerra mundial. En el año 1946, precisamente en el mes de junio, el balance del Banco Central arrojaba este resultado: oro en el país, 1.231.800.000 pesos; oro y divisas en corresponsales del exterior, 4.641.400.000 pesos. En total, en ese momento de nuestra economía, la República poseía oro y divisas por la suma de 5.873.200.000 pesos y el saldo pasivo de nuestras cuentas en el exterior era solamente de 64.000.000 de pesos. Entonces habríamos necesitado un gobierno con clara visión del menester que debía cumplir; teníamos más de una perspectiva, teníamos más de un camino: o la nacionalización de todos los servicios públicos —que costaban menos del saldo positivo en oro y divisas—, o de lo contrario otro menester no menos importante, que era dejar para un poco más adelante el problema de la adquisición de los servicios públicos, sobre todo de los que los inversores estaban empeñados en vendernos, hasta el punto de haber abonado años antes una suma que creo alcanzaba a las 10 000 libras esterlinas a un político argentino, que después fué ministro, y trajo la compra de los ferrocarriles dentro de su plan de reactivación económica, o podía utilizar las divisas para explotar económicamente los numerosos recursos de nuestro suelo que esperan el llamado del trabajo y del capital para convertirse en riqueza.

Nosotros consideramos que en esa oportunidad el gobierno argentino se quedó a medio camino; procedió a la estatización de los servicios que estaban en crisis, de los que estaban en bancarrota, y dejó de adquirir los servicios que producían suculentos dividendos, sin comprender que el perjuicio no es meramente patrimonial. El perjuicio que nosotros hemos sufrido por esta selección al revés es de una índole más profunda, porque sirve para que se ponga en tela de juicio la mayoría de edad técnica del pueblo argentino para la administración de todos los servicios públicos.

¿Qué pensar de un país que pasa por los campos de los servicios públicos como Atila por la llanura de Europa dejando ruinas, y acumulando pérdidas inmensas en todas partes donde el Estado llega? Véase, por ejemplo, lo que pasa con los ferrocarriles. Se han acumulado desde los años en que los ferrocarriles argentinos se adquirieron, más de 2.000.000.000 de pesos de déficit, tanto como costaron esos ferrocarriles. Y véase hasta qué punto se cumplió la profecía del señor presidente de la República cuando manifestaba que ahora los ferrocarriles eran nuestros y que el transporte sería barato.

Según datos que he recopilado de la Síntesis Estadística Mensual, en 1947 las entradas brutas por tonelada de carga transportada era de 18 pesos; siendo nuestros en 1951, el precio bruto por tonelada fué de 53 pesos, y en 1952 fué de 92 pesos. ¡Cuánto mejor hubiera sido adquirir, por ejemplo, en aquella época, los frigoríficos! Ya los habríamos pagado con menos de los 500.000.000 de pesos con que han sido subvencionados mientras siguen siendo inversión extranjera. ¡Cuánto mejor, señor presidente, hubiera sido estatizar la CHADE!

Sr. Gago. — No hable de la CHADE, señor diputado, que puede producir chispas.

Sr. Fassi. — En lo que a mí respecta, las chispas de la CHADE no me pueden alcanzar nunca, como no me puede alcanzar jamás el cargo de haber estado al servicio de ninguna empresa extranjera. En cambio, puedo decir al señor diputado por Buenos Aires que cuento en mi haber el haber sido abogado de muchos gremios obreros.

Sr. Otero. — ¿De qué gremios, señor diputado?

Sr. Fassi. — De la Asociación de Trabajadores del Estado —hay un señor diputado en este recinto que puede decir si es cierto—; de la Unión Tranviarios; de la Asociación Bancaria, de la Unión Viajantes de Comercio...

Sr. Otero. — ¿En qué época?

Sr. Perette. — ¿Por qué no preguntan quiénes son los abogados defensores de Tuculescu y sus socios, entre los que están funcionarios del propio gobierno?

Sra. Macri. — También podría preguntarse al señor diputado Nudelman quién es el médico de Palacios.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — El señor diputado preopinante aventuró algunas afirmaciones que creo van a quedar contradichas por los hechos. Aferrándose, con la buena fe que le es característica, al texto de la Constitución Nacional, afirmó que esta ley no tiene por objeto la inversión del capital extranjero en servicios públicos. Yo me permito, sin pretensiones de augur, decir que una de las primeras aplicaciones de esta ley será la inversión de nuevos capitales por la CADE, que parece destinada a echar chispas en este recinto, pero que tan mal nos ilumina y sirve en la actualidad.

Creo, señor presidente, que esta ley tiene por objeto aplicarse sobre todo a los servicios públicos. Me baso en la afirmación formulada por los señores ministros del equipo económico en

la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de que, con respecto a los capitales que se incorporarán en el futuro a la economía del país por vía de esta ley, no hay el peligro de subvenciones, porque en todos los casos tendrán su ganancia asegurada, no en el sentido de que la asegure el propio gobierno, pero sí en el de que sus actividades o su gestión económica serán retributivas.

Por lo que atañe a los menesteres que se pueden cumplir en el país sin incurrir en competencia con la actividad privada y los capitales nacionales —sobre lo cual hay un compromiso formal de los señores ministros—, lo que queda como margen para ganar seguro, para invertir sin riesgo, son todas las inversiones relativas a las fuentes de la energía, el petróleo, a la CADE y la ITALO.

Es por eso, señor presidente, y no porque seamos enemigos del capital extranjero, que votaremos en contra. Es decir, porque no queremos darle una autorización en blanco al Poder Ejecutivo, porque no queremos más delegar facultades, vamos a votar contra esta ley. Pero, insisto, de ninguna manera es nuestra actitud una advertencia al capital extranjero de que no tenga su lugar en la economía argentina; es producto de la desconfianza en el uso que se pueda hacer de esta ley. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Gago. — Queda aclarado que no es malo el proyecto, sino que les infunde desconfianza.

Sr. Nudelman. — Es malo el proyecto e infunde también desconfianza.

Sr. Fassi. — Es éste un mal proyecto por una serie de consideraciones sobre las cuales me voy a detener.

Dije al comienzo de mi exposición que iba a ocuparme del examen comparativo entre el régimen que se llama colonialista y este otro que, para diferenciarlo, denominaremos justicialista.

Con el régimen llamado colonialista se hicieron grandes inversiones en el país que, en su momento culminante, en 1941, llegaron a sumar 9.000.000.000 de pesos, y que llegan en la actualidad —según reconoce el Poder Ejecutivo en un memorándum que ha puesto a disposición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda— a 7.200.000.000 de pesos. Y esto no obstante el discurso del señor presidente de la República del 20 de agosto de 1947, en el cual manifestó que ya se había enjugado la deuda de 12.500 millones de pesos; que éramos país acreedor y no deudor; que teníamos 1.000 toneladas de oro en el Banco Central; que ya le habíamos prestado a otros pueblos necesitados de la tierra 1.000.000.000 de pesos, y que estábamos dispuestos a hacer nuevos préstamos por 3.000.000.000 de pesos más.

¿Cuál es el régimen jurídico de esos capitales invertidos en la época que se denomina colonia-

lista? Lo han declarado muy bien los representantes del Poder Ejecutivo en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Con respecto a esos capitales, no hay ninguna obligación del Estado; no se les brinda una vía legal en nuestro país para su repatriación, y en cuanto a sus intereses, sólo se les permite remesarlos hasta un máximo del 5 %, si entran en el régimen de algún convenio, o, de lo contrario, si la balanza de pagos con el país de origen arroja un saldo favorable para Argentina.

Vale decir, pues, que cuando se pretende que carecíamos de independencia económica no nos obligábamos a nada; pero en cambio, ahora, con el justicialismo, sean buenos o malos los futuros tiempos, dentro de dos años tendremos que encontrar las divisas para pagar el 8 % en concepto de beneficios de este capital que ingrese; y aunque sean peores todavía los tiempos en el futuro, a partir de diez años de la fecha tendrá la República Argentina el compromiso jurídico, legal, impuesto por una ley justicialista, de repatriar en un período de diez a cinco años todo el capital ingresado al país por vía de este proyecto denominado justicialista.

¿Cómo no vamos a considerar mala una ley que compromete a la Nación Argentina y que compromete el futuro por una deuda que no es de la Nación? Si la Nación quiere adquirir compromisos, que lo haga directamente, que tenga el coraje de adquirirlos directamente; pero que no siga esta vía indirecta de la ley que estamos considerando.

Aquí se enunció en forma reiterada que de ninguna manera Argentina va a contraer préstamos; pero se siguen todas las vías indirectas para llegar al resultado de que se nos preste sin contraer préstamos.

Sr. Gago. — No es así.

Sr. Fassi. — No se crea que voy a reeditar el famoso préstamo de banco a bancos, que según se ha denunciado en la Comisión de Presupuesto arroja todavía un saldo pasivo de 99.000.000 de dólares, mucho mayor que toda la deuda pública repatriada por el actual gobierno. No, señor presidente.

En el curso de las deliberaciones de la Comisión de Presupuesto se hicieron otras enunciaciones sorprendentes que no es posible que ignoren el Congreso ni la opinión pública. Nos hemos informado, por ejemplo, que el gobierno nacional por medio del Banco Central hace operaciones de mercado paralelo o bolsa negra, de manera que cuando se presenta alguien a venderle dólares, además del cambio oficial, de poco menos de 14 pesos, se le entrega una bonificación de financiación que, según expresaron los ministros, ha elevado el precio con que el Banco Central compra, a la suma de 21 pesos por dólar. Vale decir, señor presidente, que el gobierno nacional —y el señor ministro de Finanzas dijo que para eso tenía facultades— está haciendo

operaciones de mercado paralelo o bolsa negra, cosa que yo no he encontrado en ninguna de las memorias publicadas por el Banco Central.

Sr. Rumbo. — En ningún momento se dijo eso.

Sr. Fassi. — Sí, se dijo.

Sr. Rumbo. — El señor diputado está tergiversando toda la verdad de lo discutido en la comisión. Es inexacto lo que afirma.

Sr. Fassi. — Yo aseguro al señor diputado que en cuanto termine mi exposición voy a consultar la versión taquigráfica y con permiso del orador que hable en ese momento leeré las expresiones del señor ministro.

Sr. Degreef. — En ningún momento se dijo.

Sr. Rumbo. — Se habló de las operaciones de pase, que tuvieron gran publicidad y fueron motivo de una circular del Banco Central. El señor diputado sabe que para la operación de pase está fijado un término de ochenta días y hay una tabla de intereses.

Sr. Degreef. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Fassi. — Con mucho gusto.

Sr. Degreef. — Lamento tener que rectificar al señor diputado en cuanto a que el señor ministro haya manifestado en algún momento lo que dice el señor diputado.

Sr. Fassi. — Pido a los señores diputados que no me hagan buscar ahora en la versión taquigráfica...

Sr. Degreef. — No lo va a encontrar.

Sr. Fassi. — ...porque quiero utilizar toda mi hora; pero me comprometo y obligo a leer esa manifestación a los señores diputados antes de que se levante la sesión.

Sr. Pallanza. — No se pueden traer al recinto afirmaciones que no son ciertas.

Sr. Fassi. — Es cierto y lo voy a probar.

Sr. Rumbo. — Se habló de operaciones de pase, pero no de eso.

Sr. Camus. — ¿No le habrán informado mal al señor diputado?

Sr. Fassi. — No podemos dar una autorización en blanco por los motivos ya expresados, porque es la primera vez en la historia argentina que los capitales extranjeros necesiten de una ley para acudir al país, cuando siempre lo han hecho sin necesidad de leyes que les fijaran beneficios.

No lo podemos hacer porque entendemos que es la vía por la cual se va a entregar nuestro petróleo y se van a apuntalar, para perpetuarse, empresas de servicios públicos de capital extranjero.

No es ésta una afirmación en el aire. En cuanto al petróleo, saben los señores diputados que en el Plan Quinquenal se determina que para el aprovechamiento de esa riqueza natural se utilizará la concurrencia del capital extranjero.

Sr. Miel Asquía. — Pero no con el sentido que dice el señor diputado.

Sr. Fassi. — Planteada la cuestión durante las deliberaciones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los señores ministros del equipo económico manifestaron que al capital extranjero se lo utilizaría como en una especie de locación de obra. Sabemos que es posible pasar de la locación de obra a la mera locación de cosas o a los contratos sui géneris en cuya virtud, sin despojarse de la propiedad, se entrega el uso de la cosa.

En este caso, sería algo más que el uso de la cosa: sería la enajenación de una fuente vital de nuestra economía.

Sr. Fernández (H. S.). — No, señor diputado.

Sr. Fassi. — Con respecto a esta materia hay otra cuestión que no aparece suficientemente dilucidada. Noto una contradicción entre el texto del proyecto y la única fuente de interpretación auténtica que surgirá del debate: las palabras del miembro informante de la mayoría.

Si nos atenemos al texto de la ley encontramos que el capital que desea acogerse a sus disposiciones tendrá que justificar que va a cumplir uno de los fines que fije al capital extranjero el Estado argentino: que hace un aporte real de divisas, maquinarias o elementos en los términos de la ley y que se inscribe en el registro especial.

De las palabras del señor miembro informante resulta otra cosa: en lugar de aprobar la inversión, tomar nota de su monto y vigilar esos capitales, para que sólo ellos se repatrien en lo futuro, el Estado realizaría convenios.

El convenio es un contrato de derecho administrativo. El Estado no se reduce a autorizar y fiscalizar; el Estado se obliga. Y la diputación radical quiere que eso se considere y resuelva en cada caso.

Sr. Degreef. — Así se va a hacer.

Sr. Fassi. — Si en algún momento el Poder Ejecutivo entiende que determinada inversión es interesante, que firme el convenio y lo someta a la aprobación del Congreso, donde cuenta con mayoría suficiente para obtener la inmediata ratificación. No es necesario extender una autorización en blanco para disponer de todos los recursos naturales.

Sr. Degreef. — Si me permite el señor diputado...

Efectivamente, cada caso de inversión será estudiado y aprobado por el Poder Ejecutivo. El sector de la minoría se opondrá terminantemente a ese procedimiento; pero los diputados peronistas tenemos suficiente confianza en nuestro gobierno y, por ello, votaremos con tranquilidad, respeto y responsabilidad la disposición referente a los convenios. (Aplausos.)

Sr. Fassi. — Para corroborar mi palabra voy a leer la versión taquigráfica que se me requirió precedentemente y que prometí hacer: «El Banco Central ha estudiado estos casos con criterio realista, es decir que los capitales que se

desea nacionalizar se aproximan al tipo que puede significar un interés para el inversor. En caso de transmisión de capitales ha reconocido, además de los tipos del mercado libre, la contabilización a tipos especiales donde se reconoce una comisión de financiación que en algunos casos ha llevado al dólar a 21 pesos. Siempre se ha exigido como requisito indispensable la demostración real y fehaciente de la existencia de esos capitales en el exterior, a fin de evitar que se tratara de operaciones simuladas de mercado paralelo.»

Como siempre que hago una afirmación, lo hago avalado por mi palabra y digo la verdad. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Yo comprendo que la circunstancia de que la minoría radical, reducida por la ley electoral votada a ese efecto...

Sr. Pallanza. — Reducida por la voluntad del pueblo, que no los vota, y no por las leyes. El pueblo no los vota más. Por eso están tan reducidos.

Sr. Fassi. — Catorce diputados radicales se sientan aquí en representación de 2.400.000 ciudadanos, y 140 diputados representan a un electorado que no duplica esa cifra. Cada uno de nosotros representamos muchos más votos que cada uno de ustedes. (*Aplausos.*)

Sr. Alonso. — Votos de la Unión Democrática.

Sr. Pallanza. — Como siempre, se equivoca en las cifras.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Fassi. — Para el cumplimiento formal en cuya virtud se dictan las leyes, la mayoría de esta Cámara no necesita de nuestro voto para darle esta nueva arma al Poder Ejecutivo, pero crean los señores diputados de la mayoría que algún significado tiene que diputados que representan a 2.400.000 ciudadanos voten por la negativa.

En esta materia hay otra cuestión sobre la cual debemos insistir. Al pedirse al Poder Ejecutivo informes sobre las inversiones para las cuales se requiere el aporte de capital extranjero, contestó que esas inversiones se aceptarían con un orden de prelación que es el mismo enunciado en el Plan Quinquenal. Yo creo, sin que ésta sea una cuestión trascendental, que resulta inapropiado hablar de orden de prelación cuando se trata de inversiones de capitales extranjeros, porque ello significaría suponer que de inmediato van a haber ofrecimientos que abarquen todas las materias comprendidas en el segundo Plan Quinquenal, y que haya lugar para la preferencia. En la realidad de los hechos, no podemos presumir tal hipótesis, y en ese caso cada capital se ofrecerá con su preferencia y con su técnica y no sería posible decirle, por ejemplo, al capital que de-

sease instalar en el país una industria química necesaria: no, todavía no le ha llegado a usted la oportunidad porque en el orden de prelación está en primer lugar la industria siderúrgica o la industria de la minería.

Sr. Rumbo. — Le ruego al señor diputado que me permita una brevisima interrupción sobre la versión taquigráfica de la comisión.

El señor diputado hizo una referencia a la versión taquigráfica de la reunión de la comisión, en el sentido de que el señor ministro de Finanzas habría dicho que el Estado había negociado tipos especiales que llegaron hasta \$ 21. La versión taquigráfica dice lo siguiente: «En los casos de introducción de capitales» —el señor ministro habla de capitales particulares y no para negocios por cuenta del Estado— «ha reconocido, además de los tipos del mercado libre, la contabilización a tipos especiales, donde se reconoce una comisión de financiación que en algunos casos ha llevado al dólar a \$ 21. Siempre se ha exigido, como requisito indispensable, la demostración real y fehaciente de la existencia de esos capitales en el exterior, a fin de evitar que se tratara de operaciones simuladas de mercado paralelo.»

Con eso queda perfectamente aclarado, señor diputado; y muchas gracias.

Sr. Degreef. — Quiere decir que el Estado no ha intervenido para nada.

Sr. Fassi. — Como hay una autorización tácita de descontar los minutos que insumen las interrupciones, supongo que la Presidencia encontrará la oportunidad de hacerlo.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia tiene en cuenta los minutos que le quitan al señor diputado; pero el señor diputado debe computar también los minutos que la Presidencia le suma. (*Risas.*)

Sr. Fassi. — Espero de la Presidencia que me sume generosamente algunos minutos porque me parece que ésta es una cuestión que merece ser dilucidada.

En el curso de las deliberaciones de la comisión, a las cuales lamentablemente no pude concurrir...

S. Degreef. — Lo hemos lamentado nosotros también.

Sr. Fassi. — Efectivamente, y agradezco las expresiones de los señores ministros y de los señores diputados con motivo del pequeño accidente que no me permitió estar en su oportunidad en el seno de la comisión, pero que no me impide cumplir hoy mi deber en el recinto.

Sr. Rumbo. — Le hemos hecho llegar nuestro pesar, incluso por el accidente sufrido por el señor diputado.

Sr. Fassi. — La circunstancia de no haber asistido al debate en comisión me obligó a leer con mayor prolijidad las versiones taquigráficas del mismo y, no obstante el interés con que

siguiera todas estas cuestiones, encontré como nuevos elementos de conocimiento de las actividades del Banco Central, dos operaciones que me parecen independientes, y es una lástima que no esté el ministro en el seno de la Cámara para aclararlas. Pero como este debate se ha de ampliar, tal vez venga el ministro a aclararlas y tal vez me dé la razón.

Una de las operaciones consiste en lo siguiente: un capitalista extranjero quiere introducir temporariamente al país una suma de dinero y el Banco Central acepta esa suma de dinero en forma temporaria, obligándose a devolverlo. Y el ministro agrega que siempre el gobierno ha cumplido con esta obligación de devolver. En otros tiempos, esto tenía otro nombre, pero, claro, los tiempos cambian y los nombres también. Eso en otro tiempo se llamaba deuda externa flotante, pero ahora se llama anticipo al Banco Central, porque cuando conviene, el Banco Central no forma parte del Estado. (Aplausos.)

La otra cuestión que quedó completamente aclarada también en la Comisión de Presupuestos, no se refiere a los capitales que vienen temporariamente, léase todo el contexto de la exposición del señor ministro: son los capitales que vienen definitivamente.

¿Cómo se introducen habitualmente estos capitales? Por el mercado paralelo, porque uno de los principales obstáculos para las inversiones extranjeras, es el mantenimiento de tipos oficiales artificiales de cambio en beneficio de la industria y en contra de los intereses de la agricultura y la ganadería.

Y con respecto a este caso el ministro enuncia su criterio. El Banco Central sale al encuentro del mercado paralelo y como no puede ofrecer sino al tipo oficial de cambio, busca la vía indirecta para pagar lo que paga el mercado paralelo y entonces se le abona como una bonificación de financiación. ¡Qué bonificación de financiación! Eso es mercado paralelo, es mercado negro hecho por el Estado para conseguir dólares, porque el gobierno está desesperado por conseguirlos.

Sr. Rumbo. — Tenemos 554.000.000 en oro, señor diputado.

Sr. Fassi. — Nosotros hemos considerado en esta materia, sin perjuicio del auxilio de los capitales extranjeros que puedan aparecer cumpliendo las funciones que fija la ley, que debería haber un tratamiento equitativo para otros capitales que no son de menos trascendencia, y que, sin embargo, aparecen olvidados en el proyecto que estamos considerando.

Cuando analizamos este proyecto en su estructura y en su texto, parecería que la República no tuviera más que una preocupación, que

es el ahorro de divisas, como si la balanza de pagos sólo pudiera equilibrarse por esa vía. ¿No ha pensado el Poder Ejecutivo que hay otro camino que lleva al mismo resultado, que es aquel que permite acrecer las divisas que se obtienen de nuestras exportaciones? ¿Cómo es posible que en este proyecto sólo se contemplen las industrias que nos permiten ahorrar divisas? Esto, señor presidente, tiene una consecuencia sobre la economía que debe llamar la atención.

La Unión Cívica Radical aspira a que la Nación integre su economía. Nuestro partido no ha dejado de auspiciar la industrialización del país, pero también considera que se debe recurrir a la explotación cada vez más intensa y racional de los recursos naturales, que constituyen los pilares de nuestra economía. Y lo que no hay que olvidar es que, en este momento de la división del trabajo internacional, a nosotros nos toca la mejor parte, porque yo me animo a afirmar que es mejor ser agricultor que minero. Vale decir, que la República Argentina debe ir a todas las fuentes de su riqueza, pero no olvidarse que hay una que es primordial y da más divisas que todas las que se puedan ahorrar mediante procedimientos artificiales de disminución y contención de nuestras exportaciones. Es el agro con sus industrias, que requieren grandes capitales y tienen inmensos mercados. Esas industrias son las que convierten en elementos manufacturados lo que actualmente vendemos en el exterior como materia prima.

Vale decir que aun desde este punto de vista el proyecto no ofrece la suficiente vastedad, pues, sin perjuicio de llamar a la actividad a todas las fuentes que nos permiten ahorrar divisas, este país sigue teniendo como principal requerimiento aquellas industrias más de acuerdo con las condiciones de su naturaleza, en las cuales todavía no hemos agotado el esfuerzo ni hemos rendido el máximo.

Para terminar, señor presidente, sin pretender desvirtuar este debate y sin abusar de la amabilidad de la Honorable Cámara, manifiesto que nunca se pueden plantear las cuestiones relacionadas con la economía como meramente económicas. Si la República Argentina fué siempre favorecida por las corrientes inmigratorias y de capital fué porque vivió dentro de un régimen de garantías eminentemente jurídico. Nosotros estamos viviendo fuera del ámbito de la jurisdicción, y de nada valdrán las leyes de estímulo mientras el capital no sepa que viene a un país que encuentra a sus hijos hermanados en la paz y en el ejercicio de todas sus instituciones. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Macri. — Hago indicación de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de la señora diputada por la Capital.

— Resulta afirmativa de 76 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, a la hora habitual.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19 y 40.